

## **La ciudadanía latinoamericana contra la democracia neoliberal: protestas, revueltas y reconfiguración política en el tiempo presente (1989-2019)**

Latin American citizens against neoliberal democracy: protest, revolts and political reconfiguration in the present time (1989-2019)

Juan Radic

*Instituto de Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile*

Felipe Delgado Torres

*Universidad de Santiago, USACH*

### RESUMEN

El artículo propone analizar las revueltas sociales en América Latina en el siglo XXI en perspectiva histórica. Nos interrogamos acerca de las similitudes y diferencias que presenta cada una de ellas para analizar la potencial continuidad que representan. Para ello, analizaremos tres ciclos específicos de revueltas sociales considerando los casos de Argentina (2001), Ecuador (2005), y Chile (2019), deteniéndonos en dos ámbitos determinados; el acontecimiento que desencadena las protestas masivas y cómo es interpretado por la sociedad movilizadora a través del análisis de los discursos y reivindicaciones que identificamos en cada uno ellos. En segundo lugar, observando la reconfiguración política que potencialmente representan. Para ellos consideramos –brevemente— algunos mecanismos de organización surgidos durante estos ciclos y que invitan a repensar lo político y la democracia. La mirada comparada pretende construir una reflexión global mientras la temporalidad escogida invita a pensar en una dimensión histórica el cuestionamiento de fondo a la hegemonía de facto que ha establecido el

neoliberalismo en la región así como los potenciales procesos de transición cultural que representan la emergencia de nuevas sensibilidades actores y valores, que vislumbran estar frente a un cambio de época profundo e inexorable.

PALABRAS CLAVE: estallidos sociales, neoliberalismo, América Latina, historia del tiempo presente

#### ABSTRACT

The article propose to analyze to the social unrest in Latina American in the XXI century. We ask ourselves about the similarities and differences that they present to analyze the historical continuity that they represent. Our premise understands that although dissimilar, plural and temporarily disruptive, the current social conflict present connections that allow to draw a unity with respect to its meanings, establishing in its background an emancipatory practice, transformer and criticism of the current order. To do this, we analyze three specific cycles of social unrest, considering the cases of Argentine, Ecuador and Chile, at stopping at two specific areas; the event that triggers the mass protests and how is interpreted by the mobilized society through the analysis of the discourses and demands that we identify in each one of them. Second, observing the political reconfiguration that they potentially represent, considering some mechanisms of organization created during these cycles, and invite us to rethink the politics and democracy. The comparative perspective tries to construct a global reflection while the considered temporality invites us to think in a historical dimension the deep questioning of the fact hegemony that neoliberalism has established in the region, as well as the potential sensibilities, actors and values, which envision being facing a profound and inexorable change of time.

KEY WORDS: protest, Social unrest, neoliberalism, Latin American, History of the present time

#### INTRODUCCIÓN

Hace algunos años, A. Badiou (2012) reflexionaba en torno a las revueltas que sacudían al mundo árabe durante 2011. En un contexto secundado por las explosiones en la Europa mediterránea, el movimiento Occupy Wall Street en Estados Unidos y un conjunto de protestas estudiantiles en América Latina

(Massal, 2014; Radic, 2013; Castells 2012), las ideas del filósofo apostaban a la posibilidad que, al menos potencialmente, el malestar y hartazgo expresados en esa oportunidad, suponían una tímida pero renovadora rearticulación de lo político en las sociedades que las provocaban. O de lo pre-político, para ser más precisos. Pero que, no obstante, conjeturaban el renacer de una “idea” —el resurgimiento y reconfiguración del común— capaz de dar forma a la revuelta como pregonera de una construcción organizada contra el orden vigente. Ahora bien, la imposibilidad de las sociedades árabes de democratizarse definitivamente, del movimiento norteamericano de alcanzar sus objetivos, o el giro conservador experimentado en varios países del mundo, sembraron dudas respecto al auténtico sentido de la revuelta como motor efectivo de transformación. Sin embargo, y como el propio Badiou señaló, ciertos estados de latencia, retrocesos y reemergencia de gobiernos reaccionarios, no debían confundirnos respecto al sentido último de estas revueltas. En efecto, nos parece que Badiou tenía razón. Detrás de la fuerza creativa y destructiva que representa ese *despertar* de las sociedades en el tiempo presente, las revueltas establecieron como horizonte aspiracional la profundización de la democracia (Massal, 2014: 21), reconfigurando la sustancia misma del término, al menos de lo que hoy establece el orden neoliberal dominante.

Es desde esta perspectiva que proponemos observar la trayectoria de América Latina en el ciclo que aquí denominamos como *el tiempo de la democracia neoliberal*, analizando las revueltas y estallidos sociales que han marcado este tiempo. Al respecto planteamos como hipótesis que el progresivo malestar de la sociedad latinoamericana representa una crítica evidente al sistema político actual. A esta “democracia decepcionante” (Dabéné, 1999), redefinida tras el Consenso de Washington. Pero que también, por su parte, ha servido para una reconfiguración política de las sociedades que las experimentan. Estallidos, en ese sentido, potencialmente emancipatorios, contrarios a la estructura social, política y cultural del orden dominante y que enuncia desde abajo, desde la propia sociedad, la urgencia de un cambio estructural del modo en que se construye la democracia.

En este contexto, nuestro artículo aborda las revueltas y ciclos de protesta latinoamericanas<sup>1</sup>, tomando tres casos específicos producidos en distintos

---

<sup>1</sup> El empleo de términos como revuelta, protestas o estallidos, se articulan conceptualmente como fenómenos similares, empleándolos de acuerdo a cómo fueron denominados por sus propios protagonistas. En cualquier caso entendemos que responden a “ciclos de protesta o acción colectiva”, que son procesos de irrupción

momentos del periodo hegemónico de la democracia neoliberal: la *revuelta plebeya* en Argentina (2001), la *rebelión forajida* en Ecuador (2005) y el *estallido social* chileno (2019). Pese a las diferencias, los tres episodios visibilizan la crisis estructural a la que asiste la democracia y la institucionalidad política que la articula. Consideramos este tiempo como una unidad histórica particular que da cuerpo, contenido y sentido a la conflictividad social en la región, a partir de la integración que la globalización neoliberal ha supuesto en la conformación y estructuración de las sociedades (Conrad, 2017: 14). En ese sentido, el vínculo que da cohesión a este periodo lo modula el Estado latinoamericano y su democracia; la normativa impuesta, la cultura y principios que le dan sustento en el tiempo y que configuran unos valores “oficiales” que definen una determinada forma de entender la sociedad. En otras palabras, el paradigma neoliberal ha construido un modo específico de vertebrar la sociedad, sus principios, relaciones y espacios de tensión y conflicto (Massal, 2014), articulando un tipo específico de democracia.

Para analizar los estallidos y revueltas, metodológicamente utilizamos el *acontecimiento* como concepto histórico (Aróstegui, 2004: 91) que rompe la percepción de continuidad del curso de la vida, considerando los potenciales significados que representan para las sociedades que los producen, pero también que nos permite incorporar las continuidades con el pasado reciente. Por su parte, examinaremos las iniciativas de organización y acción política que surgen a partir de estos fenómenos de protesta, sosteniendo nuestro análisis en bibliografía secundaria y el cuerpo documental que suponen demandas, expresiones y prácticas en el espacio público, extraídas de la prensa local, y distintos registros gráficos pesquisados. Nos interesa al respecto, considerar el potencial sentido que se otorga a la acción, analizando valores e ideales y el modo en que se constituyen como antagonistas de la institucionalidad política oficial. Los tres casos considerados permiten trazar una trayectoria que visibiliza continuidades y cambios, sinergias y diferencias. Sugerimos que, si por una parte existe un marcado ánimo destituyente que rechaza la cultura política que supone

---

social en el espacio público, intensificación y extensión del conflicto sociopolítico, como bien lo han reseñado Ch. Tilly o S. Tarrow y D. McAdam, entre otros (2003). El propio Tarrow (2007: 202-203), establece que estos ciclos suponen “un abierto conflicto en el sistema social que incluye una rápida difusión de la acción colectiva a actores menos movilizadas un ritmo de innovación acelerado en las formas de confrontación, marcos nuevos o transformados para la acción colectiva, una combinación de participación organizada y no organizada y unas secuencias de interacción intensificada entre disidentes y autoridades.

el neoliberalismo inserto en la institucionalidad democrática, por otra, se vislumbran “reconfiguraciones de lo político” que permiten pensar nuevas alternativas emancipatorias, orientadas y sustentadas en renovados valores que nos enfrentan a la posibilidad cierta de estar frente a una nueva época (Svampa 2012).

#### LA SOCIEDAD LATINOAMERICANA EN EL TIEMPO DE LA DEMOCRACIA NEOLIBERAL<sup>2</sup>

La *década perdida* representó para América Latina el triunfo del libre mercado como sistema único de desarrollo, subordinando a este paradigma toda la estructura social, incluidos los procesos de democratización que se venían implementando en todo el continente. Bajo el paraguas del *Consenso de Washington*, se sentaron las bases estructurales de la institucionalidad que ha definido el devenir de la región en el último tercio de siglo —un cambio en la racionalidad de las burocracias públicas, como señala Ruiz (2019: 53)—, las relaciones sociales y su inserción en el sistema internacional, a partir de la prodigada estabilidad que suponía el tándem mercado y democracia (Martínez Lillo, Rubio, 2017). En momentos que se hundía el socialismo real y el paradigma estatista era fuertemente cuestionado por su falta de eficacia y versatilidad, América Latina yacía ahogada por la deuda externa y lacerada física y psicológicamente por la violencia política que supusieron las dictaduras de Seguridad Nacional y el terrorismo de Estado aplicado en la mayoría de la región. Así, la institucionalidad política emprendió el giro hacia la desregulación total de la economía abriéndola sin resguardos para las frágiles industrias nacionales; se privatizaron las empresas estratégicas; se desarticularon y privatizaron los espacios de conflicto mercantilizando las formas de relación social, abriendo una brecha abismal entre la institucionalidad y la ciudadanía. Mientras, el Estado se convertía en un actor subsidiario y se forjaban las bases de una cultura modelada

---

<sup>2</sup> Entendemos por neoliberalismo aquello que D. Harvey (2007:6) define como “una teoría práctica político-económica que afirma que la mejor forma de promover el bienestar humano es no restringir el desarrollo de las capacidades y libertades empresariales del individuo, en un marco caracterizado por derechos de propiedad privada fuertes mercados libres y libertad de comercio. El papel del Estado es crear y preservar el marco institucional apropiado para el desarrollo de estas prácticas (...) Debe disponer funciones y estructuras militares y policiales defensivas policiales y legales que son necesarias para asegurar el derecho de propiedad y garantizar (...) el correcto funcionamiento de los mercados.

por el individualismo y la “libre” competencia en sociedades profunda e históricamente desiguales. Plagadas de privilegios para una minoría, en una economía que, hasta no hace mucho, seguía pensándose como una estructura arcaica y dependiente del capital externo.

No obstante los avances en política fiscal, crecimiento macroeconómico, modernización de la estructura productiva que mejoró su competitividad a nivel internacional; la reducción de la pobreza así como de indicadores básicos de desarrollo humano (educación, salud, empleo), la percepción de la población – sostenida en mucho más que una falsa conciencia por los efectos del éxito de la modernización capitalista, como algunos teóricos del orden insisten en argumentar (Peña, 2020<sup>3</sup>)— ha estado definida por el desamparo del Estado. Y es que, en la práctica, la inseguridad y deterioro en las condiciones de vida por el empeoramiento en su hábitat gracias a la especulación urbanística, la angustia provocada por el endeudamiento estructural único mecanismo de acceso a ciertos recursos básicos; la destrucción de la naturaleza por el neo-extractivismo que supone la estrategia central de desarrollo de la economía en la región, la corrupción de la institucionalidad y su desconexión con la realidad de la mayoría de la población, o la violencia que imponen el crimen organizado en los espacios de exclusión social –ahí donde el Estado es incapaz, consciente o inconscientemente de ejercer su poder— constituyen la otra cara de la globalización neoliberal (Calderón, Castells, 2019: 19). Estos elementos resultan centrales para comprender esa percepción de asimetría y malestar instalada en el imaginario de las sociedades latinoamericanas, donde una minoría privilegiada disfruta los beneficios de la modernización y el crecimiento, mientras la gran mayoría experimenta la angustia permanente –histórica, elemental— de costear un modo digno de vivir y que ha llevado a algunos analistas a insistir en la profunda transformación de la estructura social del continente, emergiendo una nueva “popular-intermediaria” que aglutina en múltiples aspectos a los otrora sectores populares y la amplia clase media, a experimentar una misma realidad (Martuccelli, 2021). El aumento exponencial de enfermedades asociadas a la salud mental (estrés, depresión, suicidios), son quizás la manifestación más evidente de los *otros* costos que ha tenido en los cuerpos y mentes de las personas este modelo de sociedad (Informe de Desarrollo Humano, PNUD, 2019;

---

<sup>3</sup> El discurso del malestar como expresión de nuevas demandas provocadas por los avances de la modernización capitalista pueden confrontar con los dichos de J. Stiglitz (2018: 12) y a quién no puede acusarse de anticapitalista luego de ser economista jefe del Banco Mundial.

Informe PNUD, Salud y Bienestar; Organización Panamericana de salud Informe 2018; Informe Desiguales (Chile), PNUD, 2017; (Stiglitz, 2018).

La instalación del paradigma neoliberal en el sentido común de las sociedades latinoamericanas, asentó la reestructuración de nuevos valores e ideales, articulándose en la vida cotidiana y en distintos ámbitos de la sociedad, naturalizándose hasta volverse casi indistinguible. La asimilación y aceptación de los nuevos principios, se forjó gracias a la posibilidad que dio el crédito de acceder a bienes imposibles de tener sólo unos años antes, mientras la posibilidad de forjar un camino propio —estudiar emprender, convertirse en propietario— sentaba el mito de la *meritocracia* en el imaginario colectivo. Así pues, la ensoñación construida a través del consumo, el endeudamiento y el mérito del trabajo regulado por el mercado, permitiría dar el salto hacia el bienestar y la felicidad. El discurso se instaló como ley incuestionable ante el despliegue de los *aparatos ideológicos del estado*. Aquel “fatalismo ideológico” (Svampa, 2012: 121) que hegemonizó el pensamiento en los años 90. El sueño de la libertad neoliberal copó cualquier espacio de pensamiento, imaginación y acción, situando una determinada representación de la realidad, donde el mercado sustituía a la política y la competencia a la fraternidad como forma básica de relación entre las personas. La globalización progresivamente despoltizó —en clave institucional— a los ciudadanos latinoamericanos, reconfigurando la estructura ideológica misma de la sociedad.

De este modo la experiencia neoliberal instaló en la institucionalidad política la naturalización de un orden por el que había que transitar para alcanzar el porvenir; “Está tan arraigado que ni siquiera lo advertimos en tanto ideología, como si fuera una fuerza natural”, señala C. Ruiz (2019: 11). Las percepciones extremadamente excluyentes abrieron una brecha —a estas alturas auténtica fractura— entre la tecnocracia de expertos y el *sentido común* de la ciudadanía. Pero el modelo no consideraba la participación permanente de los ciudadanos salvo esporádicas intervenciones electorales, controladas y modeladas por la *partitocracia* que suponía la institucionalidad vigente (Salvador, Lara, 2009). Se hizo evidente la “gran asimetría de fuerzas que instalaba el modelo, incentivando la fragmentación y pérdida de poder de los sectores populares” (Svampa, 2012: 76).

La instalación hegemónica del concepto de crecimiento económico como tótem excluyente que justificó la deriva neoliberal de la política, la democracia y la vida, ha supuesto el desprecio de las élites tecnocráticas institucionalizadas hacia determinadas formas de concebir lo político que subyace en las prácticas de

extensos grupos de la(s) sociedad(es) del continente. Concepciones establecidas como saberes elementales que se conectan a una tradición histórica de organización comunitaria, a las cosmovisiones de los pueblos originarios o que remiten a los tiempos de la lucha por la democracia, forjadas al amparo de la necesidad, fueron desacreditadas por la razón tecnocrática.

En este contexto, existieron dos síntomas que evidenciaron el creciente malestar de la sociedad con el orden vigente. Por un parte, la creciente desafección con la política. Por otra, la fuerte resistencia social cada vez que el discurso hegemónico entró en crisis (fuese por una crisis económica, política o social).

La desafección con la política evidenció el escaso valor que las decisiones electorales tuvieron en el sistema político-institucional. La antipatía disparó el absentismo electoral (Informe PNUD, Sobre Participación Electoral en Chile, 2017; 11) y progresivamente responsabilizó a la propia democracia de su ineficacia; el apoyo a la democracia sólo alcanza el 48% en la región (Latinobarómetro 2018). El “no nos representan” se masificó por el continente como evidencian pancartas y rayados que invaden las calles latinoamericanas. El 2001 fue evidente en Buenos Aires, hoy lo es Santiago. Las cifras así lo reafirman: si en 2008 un 58% no se sentía identificada con sus representantes, en 2016 alcanzaba el 83% (Castells, 2019, PNUD 2016). A la desafección siguió un malestar profundo con la institucionalidad; en aquellas naciones donde la estabilidad macroeconómica se mantuvo, la conflictividad y resistencia pudo ser contenida por el discurso oficial. Sin embargo, allí donde se produjeron crisis económicas, la ruptura y el malestar se instalaron de manera masiva y evidente, expresando una crítica profunda al orden dominante (Massal, 2014). La crisis del Estado y del sistema político es hoy centro de los problemas del continente (Calderón, Castells, 2019: 21).

Fue, entonces, desde la sociedad civil que surgieron las primeras reacciones a la transformación que implicó el giro neoliberal. Desesperadas primero, pero prontamente organizadas como se observó a partir del Foro de Sao Paulo (1990), que sirvió para repensar la situación de la izquierda latinoamericana desde renovados puntos de vista. Ahora bien, el *caracazo* contra el “*paquetazo*” de reformas neoliberales implementadas por el *progresista* Carlos Andrés Pérez, en Venezuela, en 1989, resultó ser el primer llamado de alerta acerca de la disconformidad general que la(s) sociedad(es) civil(es) del continente presentaban al giro neoliberal y los efectos que este nuevo orden representaba para sus vidas (Sader, Jinkings, 2009). Por su parte, las protestas indígenas de la CONAIE (Corporación Nacional Indígena del Ecuador) a inicios de 1990,

resultaron premonitorias acerca de la emergencia de actores históricamente excluidos en el escenario político institucional (Andrade, Herrera, Ospina, 2008), situando en nuevas claves sus demandas a la democracia neoliberal. Fue, no obstante, la movilización zapatista, en 1994, la que sentó un antecedente decisivo a este respecto, visibilizando otras formas de entender el mundo, más allá de la retórica del valor y el mercado e incluso del paradigma moderno occidental; su reclamo cuestionaba las bases mismas del estado-nación, la política y la forma de entender la democracia (Le Bot, 1997). Al año siguiente, se harían masivas las movilizaciones en Argentina contra la ola privatizadora impulsada por Carlos Menem. En esta oportunidad la protesta reformulaba en una dimensión urbana y obrera el malestar de la sociedad con el orden neoliberal. Luego vino la movilización de la sociedad boliviana, articulada ante la privatización de los recursos naturales y minerales; estallidos en Ecuador que derrocaron gobiernos –tres– y protestas estudiantiles masivas en Colombia, México y Chile que, con matices, divergencias e intereses muy diversos –y sin una clara continuidad ni linealidad temporal– materializaron el *mal-estar* de la sociedad. Así, los últimos treinta años han presenciado la consolidación de intensos ciclos de protestas y revueltas que demandan con urgencia un cambio en los modos de hacer política de parte de los Estados, sobre todo, en la línea de dejar de subordinar la democracia y el bien común a los intereses del mercado.

El giro progresista experimentado en varios países de la región a lo largo del siglo XXI, respondió efectivamente a la crisis de hegemonía del paradigma neoliberal (Sader, García Linera, Forster, 2016). En buena medida, las demandas de la sociedad reposicionaron los proyectos de la “nueva izquierda” latinoamericana (Chávez, Garavito, Barret, 2008), no obstante correr en paralelo a las trayectorias de politización de sus sociedades. Si bien permitió una reconfiguración de las relaciones entre Estado y sociedad en clave “progresista” –un programa neodesarrollista (Calderón y Castells, 2019: 33-40)— su impacto ha sido parcial y limitado.

Por otra parte, la progresiva *horizontalización* de las relaciones sociales a partir del avance de la tecnología aparejada a las redes sociales (Castells, 2012, Tilly 2010), ha potenciado nuevas formas de acción, organización y percepción de la realidad. En ese sentido, debemos reconocer que la incorporación de nuevos actores sociales y nuevas generaciones de ciudadan@s han servido para repensar las formas de percibir la realidad, conformando incluso un nuevo “ethos militante” (Svampa, 2012: 78). A los pueblos originarios y organizaciones de desempleadxs, se han sumado jóvenes, organizaciones medioambientales y un polisémico movimiento feminista que representan una auténtica reconfiguración

de lo político en claves completamente distintas a las que, hasta hoy, han regido la institucionalidad. Ya no sólo como espacios reactivos contra el orden neoliberal vigente, sino como fuerzas creativas que proyectan diversos y renovados modos de entender lo político, la acción colectiva y la democracia. Donde la territorialidad se ha constituido en espacio de resistencia pero también de resignificación de lo social; la acción directa en una herramienta de lucha ante la obsolescencia de los históricos mecanismos de mediación institucional de la democracia liberal (desde el parlamento hasta los propios sindicatos); igualmente, se consolidan nuevas formas de comprender la democracia, donde la participación de tod@s, supone una obligación. La democracia directa, en ese sentido, es otro rasgo distintivo entre los más diversos movimientos y organizaciones populares que surgen en la actualidad, enfatizando esa búsqueda de horizontalidad relacional.

Finalmente, la permanente reivindicación de autonomía aparece como otra característica de la nueva dimensión de la democracia que se articula desde los movimientos sociales. Esta auténtica necesidad de *autodeterminación* define hasta qué punto la política popular toma distancia de las estructuras tradicionales, plasmando una dimensión utópica –también subjetiva– pero fuertemente compartida por la creación de proyectos alternativos de otras formas de concebir el mundo (Svampa, 2012:80).

Así, en síntesis, observamos que las experiencias de treinta años de neoliberalismo, instalaron la paradójica situación de despolitizar a la sociedad pero, ante el vacío, incentivar la repolitización autónoma y bajo nuevos paradigmas a importantes grupos de personas. Esa construcción de un “nuevo pueblo” como señala Carlos Ruiz para el caso chileno (2020). Menos ideologizado probablemente como ha insistido M Canales (2021), pero a su vez mejor conectados con valores “verdes” autónomo-subjetivos. Lo que resulta evidente, en suma, es la creciente reconfiguración de representaciones y percepciones de lo político y lo democrático, que sin lugar a dudas se posicionan como un antagonismo a la institucionalidad vigente en el continente y suponen estar frente a un tránsito hacia un nuevo tiempo.

¡QUE SE VAYAN TODOS, QUE NO QUEDE NI UN SOLO! LA GRAN REVUELTA PLEBEYA EN ARGENTINA (2001)

“Las causas de esta situación vienen de lejos. Todos los que hemos gobernado o ejercido posiciones de poder, nos debemos la autocrítica”<sup>4</sup>. Así señalaba Fernando de la Rúa, en cadena nacional del 19 de diciembre de 2001, la crisis terminal a la que se enfrentaba su gobierno tras la ola de protestas, saqueos y manifestaciones desencadenadas por la decisión de restringir los retiros de fondos de los bancos —el conocido *corralito*— ante la masiva fuga de capitales que venía produciéndose desde hacía meses. En esa alocución de la Rúa declaró el estado de sitio para intentar contener a la multitud; la crisis económica se arrastraba desde hacía años —al menos desde el estallido financiero mexicano de 1995 que puso en crisis el modelo de convertibilidad—, mientras la deuda pública y privada a fines de siglo alcanzaba los \$200.000 millones de dólares. Al colapso económico se sumaba el total descrédito de la política, luego de la creciente corrupción que la reforma del Estado había provocado con la privatización masiva de las empresas del fisco y la transformación del sistema de seguridad. A esas alturas, parecía cuestión de tiempo que los movimientos de desempleados, organizados desde 1995, fueran acompañados por la masiva clase media, enrabada por el empobrecimiento que experimentaban. La protesta disruptiva, fragmentada y parcial comenzó progresivamente a constituirse en un recurso político, hasta convertirse en un aspecto normal de la vida argentina (Schuster, Pérez, Pereyra, 2002:10).

La *revuelta plebeya*, fulgurante, violenta, desesperada y multitudinaria, derrumbó al gobierno de la Alianza del FREPASO que había reunido a grupos moderados y de centroizquierda para revertir el descrédito institucional que la corrupción *menemista* y el clientelismo partidista había instalado (Seoane, 2009: 113), intentando contener la gravísima situación económica a la que se enfrentaba el país. Pero el gobierno de la Rúa mantuvo la ortodoxia supeditando su acción a los designios del FMI y la banca internacional. Domingo Cavallo, responsable máximo del giro neoliberal durante la administración Menem, era el ministro de Economía al momento del estallido. A esas alturas de diciembre el descalabro era absoluto. El *corralito* había instalado el pánico y la desconfianza en toda la ciudadanía. Desde la madrugada del 19, los saqueos a pequeñas y medianas tiendas movilizaban a una multitud enrabada y desesperada, mientras

---

<sup>4</sup> Mensaje del presidente Fernando de la Rúa en cadena nacional. RTE Red de Televisión del Estado, <http://www.rta-se.com.ar> 19.12.2001. En: <https://www.youtube.com/watch?v=h67HpxqQ7Hg> revisado, 04.08.2020.

las pedradas por las calles y piquetes cortando las calles paralizaban al país. Los intentos de control policial saldaban el estallido con cinco muertos en sólo una jornada (Granovsky, 2001). Fue, sin embargo, la decisión del presidente de imponer estado de sitio lo que desató un cacerolazo ensordecedor y enfocó la rabia en su persona y todo el sistema político. Acto seguido renunciaba Domingo Cavallo –el súper ministro— y más tarde, la ciudadanía observaba impertérrita por televisión cómo el propio de la Rúa huía en helicóptero de La Casa Rosada.

El acontecimiento histórico que representaron esas dos jornadas de “revuelta popular”, se mostraba en todo su espesor; plagado de ineluctables caminos propios (Traverso, 2012), rompiendo definitivamente la normalidad de la vida en crisis de los argentinos, marcando una fractura social profunda y definitiva entre la multitud movilizada y la institucionalidad democrática. Esos dos días, señala Schuster, (2008: 228) supusieron “el fin de un tiempo histórico”. De esa institucionalidad política, al menos, que venía definiendo la vida del último tercio del siglo XX. El vacío de poder por el descrédito de la política se expresó masivo y rotundo aquellos días –el sitio al congreso, desafiando al estado de sitio con cánticos contra los políticos, fueron un emblema de la ilegitimidad de las decisiones gubernamentales— y se mantuvo hasta 2004, cuando se consolidaba cierta estabilidad con el gobierno de Néstor Kirchner que apuntaba, por lo demás, a un giro considerable en materia social y económica. Pero tras el estallido, con la economía en *default* –declarado a la semana del colapso— y la legitimidad del sistema político en el suelo, la debilidad institucional se profundizó cuando resultó incapaz de solucionar los problemas económicos urgentes e incorporar las reivindicaciones que el activo movimiento social exigía<sup>5</sup>.

Pero si el acontecimiento que representó el estallido del 2001 en Argentina resultó una ruptura evidente del tiempo histórico, igualmente marcaba una situación de continuidad, de duración (Aróstegui, 2004: 91) con el pasado inmediato de la postdictadura. Un tiempo difuso entre un pasado que se iba y un futuro que aún no llegaba (Schuster, Pérez, Pereyra, et. al, 2002: 5). Y en eso, en efecto, de la Rúa tenía razón. La transformación de las estructuras económicas argentinas en clave monetarista, se remontaban a los aciagos tiempos de la dictadura de Reorganización Nacional (1976-1983), cuando Martínez de Hoz,

---

<sup>5</sup> El gobierno Duhalde (2001-2003), fue el más duradero durante el periodo, pero debió acelerar las elecciones ante el descrédito absoluto que significaron las imágenes de policías asesinando descaradamente a dos piqueteros durante una manifestación de protesta en junio de 2002.

ministro de economía del régimen y representante de la oligarquía agroexportadora, abrió desreguladamente la economía e inició la sustitución del capitalismo productivo por uno de corte abiertamente financiero y especulativo (Sader, Jinkings, 2009: 119). Sin embargo, pese a la crisis de la deuda que sacudió a la economía argentina<sup>6</sup> provocando la salida anticipada de Alfonsín en 1989, el giro neoliberal se confirmó durante la década de los 90', cuando el gobierno justicialista de Carlos Menem –avalado por el FMI a través de lo que luego se conoció como el Plan Brady— inició una ola privatizadora de las industrias del Estado y el plan de convertibilidad peso-dólar, que supuso liquidez para el gobierno que controlaba, por fin, la inflación. Como en tantos otros casos, se habló del “milagro argentino” (Cuneo Gascó, 2013: 42), gracias a la disciplina fiscal, pero sobre todo gracias a la deuda; el compromiso de pagar intereses y asegurar la puntualidad en el pago, se conjugó con la enorme liquidez existente en el sistema internacional, facilitando nuevos créditos que articularon el breve y efímero milagro menemista. Sin embargo, como señala Seoane (2009: 120), el Plan Brady, representó la incorporación definitiva de Argentina al modelo neoliberal, siendo, a su vez, el responsable del colapso de 2001.

Visto en perspectiva, lo único que se intensificó durante este periodo fue el desempleo; entre 1991 y 1999 se duplicó del 6 al casi 13%, teniendo un *peak* de 18% a mediados de la década (Dinerstein, Contartese, Deledicque, 2010: 22). Y es que, en definitiva, el plan de ajuste neoliberal, y toda la política de “estabilidad”, supuso una fractura social que empobreció y desestructuró las redes de solidaridad que la clase media y los sectores populares tenían hasta ahí. Es decir, la “estabilidad económica” desató una profunda inestabilidad social y política. Pero esto no era novedad. Desde mucho antes del estallido, estudios especializados insistían en la fragmentación social que estaba experimentando el país durante la década de 1990, entre aquellos que lograban integrarse definitivamente al modelo (1/3 de la población), aquellos que no lo hacían en absoluto (otro tercio) y aquellos que lo lograban sólo parcialmente (el tercio restante) (Schuster, 2008: 252). Esta situación, anticipada y prevista, no fue leída por el sistema político que empujó en clave monetarista la situación hasta su colapso, fuertemente presionada por el BM y FMI.

Pero la crisis del 2001 fue una explosión integral. No sólo fue un problema económico. Con el estallido también hizo crack la política y la sociedad. Hasta la cultura se vio fuertemente golpeada. Luego de tres décadas de implementación

---

<sup>6</sup> Según datos aportados por Seoane (2009), la deuda externa se quintuplicó durante este periodo, pasando de 8.900 millones USD, a 43.000 millones USD.

del modelo de acumulación, la década de los 90' sólo profundizó la concentración de la riqueza, la descapitalización del Estado y el endeudamiento externo. Por eso, la crisis económica encontró a un país roto y fragmentado; la política –desde el retorno a la democracia– subordinada al poder financiero coadyuvando a su deterioro en la percepción de la sociedad, deslegitimando a la propia institucionalidad democrática del Estado. Por eso no fue de extrañar que la consigna más habitual oída en las marchas y protestas del 2001 fuera “que se vayan todos, que no quede ni uno solo”, en clara alusión al hartazgo con el sistema político que había dejado en total desamparo a la población (Página 12, 20.12.01). A esas alturas los planes de desarrollo social habían desaparecido al igual que los planes de integración y solidaridad. En parte, la movilización piquetera respondía a ese abandono que el Estado había realizado de su sociedad (Mazzeo, 2014). Este escenario resituó el papel de la acción colectiva. La movilización social, en efecto, se convirtió en el exclusivo espacio de articulación política de la sociedad –al menos de parte de ella– superando el electoralismo clásico de la democracia liberal. En ese sentido, el caso argentino evidenció que la falta de legitimidad de sus representantes –expresado en cada cántico, cada pancarta que acompañó a las movilizaciones (Página 12, 19.12.01)— corroyó a la propia democracia: la legitimidad del voto se perdió y el vacío de poder fue evidente. De este modo, el fracaso de la Alianza encabezada por de la Rúa, representaba el fracaso del sistema político en su conjunto (Schuster, 2008:233). De ahí en más, las estrategias concertadas desde la elite institucional carecieron de crédito en la población. Sólo la articulación de espacios –paraestatales— de reconfiguración de lo político en clave local, permitieron reconducir el debate. Espacios que, aunque progresivamente fueron copados por las estructuras partidistas (Svampa, 2012: 124) insertaron en la agenda institucional aspectos centrales de las reivindicaciones de los argentinos.

#### DE PIQUETES, CACEROLAS Y ASAMBLEAS. DEL COLAPSO A LA REARTICULACIÓN DE LA SOCIEDAD

La trayectoria de la acción colectiva tras la dictadura permite identificar el progresivo cambio que se experimenta y el punto de inflexión que significó el estallido de 2001. Siguiendo a Schuster y Pereyra (2001), la movilización argentina tras la dictadura se definió por el cambio de las estructuras económicas y sociales que incentiva el giro neoliberal. El periodo 1983-1988 se vertebró en torno a los ejes socioeconómico-laboral y político-ciudadano, donde los principales articuladores fueron sindicatos industriales y organizaciones de DDHH que buscaban verdad y justicia por los crímenes de la dictadura. El

sistema político respondió con preocupación a estas reivindicaciones por temor a un retroceso autoritario. Así, los requerimientos referidos a las víctimas de la dictadura, quedaron supeditados a la gobernabilidad. Un segundo momento (1989 y 1994) se caracteriza porque el 60% de la protesta continúa siendo de matriz sindical, en su mayoría por servicios estatales que abandonan su función social producto del giro *menemista* (Pereyra, 2010). Es decir, fueron protestas defensivas (Schuster, Pereyra, 2001). Finalmente, entre 1995 y 2001, se percibe una gran dispersión de la protesta. Es un tiempo de fragmentación donde, sin embargo, florecen movilizaciones de matriz ciudadana; por la justicia contra la violencia policial, igualdad de oportunidades, daños ambientales y trabajo. Fue en este contexto que emerge nuevo tipo de organización que comienza a articular el aprendizaje y sistematización de renovados repertorios de acción (Schuster, Pereyra, 2001) coronadas con el estallido de 2001. Los piquetes de desocupados resultaron las más potentes, superando a los sindicatos que quedan obsoletos como representantes del mundo obrero-popular.

Las organizaciones piqueteras presentaron gran diversidad. No obstante, su mayoría se articuló en tres grandes proyectos (Mazzeo, 2014: 33). En primer lugar, la representada por la *Federación Tierra y Vivienda* forjada al amparo de la CTA (Central de Trabajadores Argentinos) creada en 1992. Su propósito se enfocó en la revitalización de la clase trabajadora como motor del crecimiento económico, es decir, en la incorporación de los trabajadores desocupados a través de políticas integradoras. Su carácter resultó más bien reformista. Un segundo sector ligado a la izquierda tradicional, se organizó en el Bloque Piquetero Nacional (BPN). A diferencia de la CTA, proponen cambios de fondo, aunque su agenda anticapitalista se organiza subordinada a la estrategia de la izquierda tradicional (Dinerstein, Contartese, Deledicque, 2010: 30). Un tercer grupo emergente fue el autonomista, donde destaca el Frente Popular Darío Santillán. Sus planteamientos rechazaron abiertamente los otros caminos, esto es, de inclusión y ruptura armónica con la izquierda tradicional, para promover prácticas autónomas, orientadas por nuevos valores anticapitalistas, pero fundamentalmente al margen de toda estructura partidista tradicional (Frente Popular Darío Santillán, 2013). Su trabajo se centró en el desarrollo territorial creando en el espacio local redes de solidaridad entre sus miembros, una práctica comunitaria de democracia directa y la horizontalidad en la toma de decisiones. El foco estuvo en recuperar la capacidad humana del trabajo digno como una práctica solidaria y no exclusivamente por el interés económico y el beneficio individual (Svampa, 2012: 117), manifestando expresamente que su lucha era contra las políticas neoliberales dominantes (FPDS, 2013, 17).

Así pues, el 2001 junto a ese ánimo destituyente, se visibiliza la reconfiguración de las identidades políticas de la sociedad, construida por años en espacios internos de discusión, articulación y reivindicación de sus intereses. La organización y participación incentivó un trato horizontal entre actores (Dinerstein, Contartese, Deledicque, 2010: 25), y visibilizó una enorme diversidad de prácticas que da cuenta de la polisemia detrás del estallido del 2001. Es importante aclarar al respecto, que no se puede otorgar un mismo sentido y unidad a expresiones tan plurales como fueron el caceroleo, saqueos, piquetes y asambleas. Conviene, entonces, observar cada una de ellas para comprender sus significados.

Cada vez que irrumpen los saqueos como práctica que acompaña a un ciclo de acción colectiva, se identifican particularidades referidas a contextos y especificidades locales. Pero debemos considerar el correlato que este tipo de acciones adquiere a nivel global. El nexo vinculante dice relación, por una parte, con la exclusión. Sea esta económica, social o cultural. El problema radica no tanto en su exclusión de la sociedad —como antiguamente la teoría de la marginalidad analizaba a las sociedades latinoamericanas— como en su incapacidad de acceder a los beneficios del modelo. Igualmente, la estructura normativa sindical a estos actores como elementos nocivos y, por tanto, no son indispensables para el cuerpo social (Bauman, 2012: 12). En América Latina la consideración sobre estos actores adquiere una connotación más de clase que racial como ocurre en Europa. En esa lógica, sacar provecho personal adueñándose de mercancías de todo tipo (la tecnología suele ser la más requerida), se acompaña de un ataque a la propia autoimagen de cohesión e integración que se construye desde el poder, representando un significado subrepticio pero claramente político que manifiesta un malestar y resentimiento con la sociedad. Si al desamparo añadimos el efecto perverso de la retórica del emprendimiento individual, *rascarse con las propias uñas* a cualquier costo, es un símbolo manifiesto de los efectos nocivos de este tipo de discursos.

El cacerolazo fue, por su parte, la forma de acción de la masa y la gran novedad que emerge con la revuelta de diciembre. Su fuerza atronadora, marcó ese momento de la historia argentina monopolizando el símbolo del malestar. Y si bien se caracterizó, luego, por ser identificado como uno de los canales de los sectores medios —expresión desesperada por recuperar sus ahorros retenidos tras el colapso financiero— durante esa semana, las cacerolas se escucharon en cada rincón del gran Buenos Aires (Schuster y Pereyra, 2002).

El caceroleo, efectivo como símbolo del malestar, presentó no obstante varios problemas luego de ese primer momento, al no concretar esa expresión en reivindicaciones concretas. La tendencia a la dispersión y a la tensión por el monopolio de la acción marcó su devenir; si por un lado siguió siendo el modo de expresión de los sectores medios, por otra, la proliferación de asambleas populares sumamente diversas en su conformación social (Svampa, 2012: 119), también redefinieron el significado de la acción ciudadana, reconduciendo el malestar a esos espacios de participación. El progresivo cauce institucional que fueron encontrando los perjudicados por el corralito, provocaron la disolución de este repertorio entre los sectores medios, enfocados en la solución particular de sus problemas (Schuster: 2008: 232).

El espacio de reunión, autoorganización, participación y deliberación que supusieron las asambleas vecinales, resultaron un símbolo de la ruptura con la institucionalidad. Tanto el esfuerzo solidario como su énfasis en la horizontalización de las relaciones entre sus miembros, materializaron su distancia con la política institucional. El vacío de poder y la articulación de las asambleas, devino en un acelerado empoderamiento sociopolítico de sus miembros, nuevos protagonistas de la vida pública argentina. De ellas surgieron —más tarde— organizaciones intermedias de coordinación interbarrial que dialogaron con otros grupos organizados (cartoneros, piqueteros desempleados miembros de tomas de fábricas, etc.), que también pretendían mantener distancia de la política institucional y los partidos. Esto se vio incentivado por la brutal represión policial a estos espacios.

Las asambleas pues, “ensancharon la dimensión del cacerolazo” así como de la propia noción de clase media (Schuster, Pérez Pereyra, 2002: 14), al visibilizar propuestas y alternativas que reestructuraron en clave multidimensional el malestar de la sociedad. En ellas, efectivamente se extendió la discusión entre distintas personas de los más variados grupos etarios y socioeconómicos para hablar sobre política pública —la constitución de comisiones sobre salud, educación, prensa, política, marcaron este tipo de organizaciones populares durante el 2002—, llevando a estos espacios a representar parte del crisol de la sociedad porteña. Es cierto que dicha polisemia y la manifiesta intención de respetar ese espacio y tiempo de diversidad dificultó avances en clave instituyente, sin embargo, demostraban otros modos de entender y hacer política. Las asambleas sostuvieron el conflicto en el tiempo más allá de lo imaginado, dando contenido al cacerolazo en el tiempo, convirtiéndose en representantes de la pluralidad de la sociedad argentina.

El inexorable desgaste cotidiano de mantener con vida estas instancias, la dificultad de alcanzar objetivos y posibilidades estables de organización que sustentasen esta práctica en el tiempo y la fuerte presión de la izquierda tradicional por conducir estos espacios, hicieron mella en muchos de sus actores independientes, provocando luego de un año una considerable fragmentación. De esta forma, las asambleas padecieron el conflicto permanente entre mantener su autonomía o avanzar en objetivos concretos que las acercaban a la institucionalización. Este fue el dilema al que debieron enfrentarse. Entre alcanzar algunas de sus reivindicaciones o fortalecer su identidad. No obstante, perduraron. Sobre todo en el ámbito local. Fue allí donde convergieron las disposiciones con las posibilidades de articular la acción política. Esto representó algo muy relevante en el propio sentido de lo político (Schuster, 2008), ya que instaló y amplió el debate ciudadano a las realidades territoriales y no sólo a una discusión desde las altas esferas. La reflexión que realiza Maristella Svampa (2012: 125) acerca de las distintas concepciones que se perfilan en los actores que componen —y perduran— en las asambleas barriales, nos aproxima al tenor del debate y los enfoques en disputas entre la ciudadanía movilizada. La crisis total del sistema argentino, invitó a los ciudadanos a un repensar la política. Qué duda cabe. Si sus miembros claman por una transformación de fondo, algunos lo hacen pensando en transformar el Estado. Otros van más allá. En el sentido de pensar otras formas de sociabilidad, amparadas en redes organizativas descentralizadas, al margen de las estructuras institucionales tradicionales.

“FUERA LUCIO... FUERA TODOS” LA REVUELTA FORAJIDA EN ECUADOR  
(2005)

“La caída de Lucio Gutiérrez tiene un enorme interés analítico por las continuidades que muestra de la política ecuatoriana en los últimos años, pero también por una serie de fenómenos nuevos cuya interpretación abre múltiples interrogantes sobre el futuro de la democracia. Parecería que el Ecuador se debate entre el agravamiento de la crisis de inestabilidad iniciada en 1997 con la destitución de Abdalá Bucaram, y el apareamiento de prácticas, discursos, luchas, unidas a nuevos actores sociales, que buscan cambiar las maneras de hacer política” (Burbano, 2005:21). Así comenzaba el dossier de FLACSO destinado a analizar los hechos que terminaron con la salida del ex coronel, Lucio Gutiérrez del gobierno de Ecuador en abril de 2005. Era el tercer gobierno derrocado en ocho años, básicamente por la acción de la ciudadanía movilizada, cansada de los abusos y engaños. Pues en este caso, resultaba evidente que junto

a la permanencia que significaba la crisis institucional, emergían fenómenos sociales y políticos nuevos, interesantes en cuanto a la actitud y perfil de los actores –y actrices— de la revuelta de abril así como sus repertorios de acción. En efecto, la protesta no hacía más que evidenciar la crisis profunda de la democracia. Al igual que en 1997 con Bucaram y el 2000 con Mahuad, la ciudadanía salió a las calles masivamente para expresar su malestar frente a un deslegitimado sistema político<sup>7</sup>. Sin embargo, en esta ocasión, el poderoso movimiento indígena no había comandado la movilización como en las ocasiones anteriores, lacerado por el descrédito que representó la participación de algunos de sus representantes en el gobierno del coronel. A su vez, las FF.AA –otro actor relevante en la vida política desde 1997— se encontraban directamente apuntadas tras el fracaso del gobierno de Gutiérrez. Lo particular de esta revuelta, entonces, estuvo en la espontaneidad de actores sociales que hasta aquí se encontraban en un segundo plano de la acción colectiva. Sin liderazgos definidos ni tradicionales, la revuelta de abril reunió a una amplia gama de la sociedad civil –de ahí la polivalencia sus los significados — donde jóvenes, mujeres y familias urbanas de clase media se volcaron a las calles para decir basta. Esto supuso un cambio en el tenor de la protesta (Eduardo Paredes, en Harnecker, 2014:33), que invitaba con actos simples pero muy concretos, pensar en profundidad el sentido de este nuevo estallido. En ese sentido, la ciudadanía protestó efusivamente en defensa de la democracia, articulando difusa, pero de manera contundente, marcos referenciales éticos sobre lo público, lo digno y lo político, que iban más allá de un interés sectorial (Cfr, Bustamente, 2005:56). Esta cuestión adquirió forma más concreta, luego de la deriva institucional que experimentó Ecuador tras la emergencia forajida. Con una renovada articulación política que dio sustento al proyecto de Alianza País encabezado por Rafael Correa, Ecuador experimentó quizás la década de mayor estabilidad política, social y económica de los últimos cincuenta años. En esa conexión entre el proyecto institucional que supuso Correa y los valores que propugnó la revuelta forajida, subyace la relevancia de este ciclo de acción colectiva.

---

<sup>7</sup> El informe de Transparencia Internacional (diciembre, 2004) estableció a los partidos políticos latinoamericanos como los organismos más corruptos del mundo, siendo Ecuador y su sistema partidario el que alcanzó la mayor puntuación del mundo (4.9 de 5.0 siendo 1 no corrupto y 5 muy corrupto).

EL ACONTECIMIENTO. LA REVUELTA DE ABRIL Y LA CAÍDA DE GUTIÉRREZ

“Voy a poner juicio penal a esos forajidos que no eran del pueblo” (La Hora, 14.04.05), señaló Lucio Gutiérrez, luego que una masa de manifestantes, mayoritariamente jóvenes, sin militancia ni organización conocida, se expresara pacíficamente a las afueras de su residencia particular, el 14 de abril de 2005. El acto, totalmente espontáneo, inauguraba el escrache como repertorio de acción colectiva en Ecuador, pero además desataba la protesta ciudadana autónoma, sin dirección de partidos ni organizaciones, articulada a partir de la difusión radial, el boca a boca y las nuevas tecnologías (correos electrónicos y SMS) de miles de ciudadanos cansados de la política institucional: “yo también soy forajida”, respondió una mujer por radio La Luna, en referencia a los dichos del presidente. Cientos llamaron a la radio, escribieron a los diarios y luego lo expresaron en sus pancartas, identificándose y declarándose forajidos, nuevo símbolo del hartazgo ciudadano y el antagonismo entre la multitud y el gobierno.

Fueron ocho días intensos los que acabaron con el *Gutierrato* (Ramírez, 2005), aunque la nueva crisis del sistema político se había articulado seis meses antes cuando el gobierno, ante la progresiva pérdida de su base de apoyo (pese a su retórica populista de izquierda, progresivamente su gobierno implementó políticas neoliberales sugeridas por el FMI además de aceptar un TLC con EE.UU permitiendo la construcción de una base naval estadounidense en Manta), decidió intervenir el poder judicial a través de la renovación arbitraria de los miembros del Tribunal Constitucional sosteniéndose en sus otrora adversarios, el multimillonario bananero Álvaro Novoa y el prófugo Bucaram. Es más, el nuevo Presidente de la Corte Suprema –cercano a Bucaram— anuló todos los juicios contra “El Loco”, permitiéndole retornar al país sin causas pendientes. De ahí en más se inició un tenso tira y afloje entre el gobierno y sus grupos de poder y la oposición partidista, que sólo aumentó el descrédito de la institucionalidad y el profundo malestar de la población. Por esas fechas –a fines de 2004— ya se estaban organizando las primeras asambleas barriales para discutir, dialogar y organizarse como recuerda Manuela Gallegos, activista desde aquella oportunidad y más tarde colaboradora en el gobierno de R. Correa (Cuneo, Gascó, 2013: 206). Fue desde estos espacios que comenzaron a convocarse las primeras marchas a comienzos de 2005, las que se fueron intensificando y masificando hasta el 13 de abril fecha que dio inicio al ciclo que sacó a Gutiérrez del poder.

Movilizaciones masivas, escraches a autoridades, cacerolazos, asambleas y un abierto tono festivo y pacífico, adornado con cánticos futboleros –“Vamooooos

ecuatoriano, que esta noche, lo vamos a botaaar”; “sí se puede”— batucadas y una serie de repertorios que reapropiaron prácticas cotidianas como modos de protesta (Ramírez, 2005b:21) daban cuenta —una vez más— del ánimo destituyente de la población. Junto al cacerolazo vino el tablazo, el reventón —de globos—, el “rollazo” (de papel higiénico para limpiar la suciedad provocada por el sistema político), el “pitazo” y el “mochilazo” de los estudiantes, entre muchos otros (Unda, 2005: 133). Pese a la tensión y la creciente incertidumbre, la gente había recuperado la voz criticando con fuerza a toda la institucionalidad, incluida aquella articulada por Gutiérrez para contrarrestar la influencia de la oligarquía partidista (García Gallegos, 2005: 95). La política volvió a las calles, se instaló el diálogo directo, sin intermediarios y los cacerolazos se propagaron por muchos barrios de Quito y el país. La gente salía al atardecer a protestar y persistía hasta bien entrada la madrugada.

Una vez pasada la novedad del primer día, la protesta fue duramente reprimida por la policía. El gobierno decretó estado de sitio el viernes 15, y bombardeó con lacrimógenas las plazas y calles del centro de la capital. Pero la violencia incentivó más la organización espontánea de la gente, sobre todo de los más jóvenes que no dudaron en combatir la represión. Por radio y SMS, se convocaban acciones fugaces que llamaban a sitiar el centro y el Parlamento. Pese a los esfuerzos de Gutiérrez de disponer de sus redes clientelares para activar una contramanifestación (se constató la llegada de grupos civiles de choques adherentes al gobierno desde Guayaquil), la masividad y transversalidad de la protesta forajida fue dejando sin margen al gobierno que insistió en forzar el enfrentamiento. Luego de varios días de auténticas batallas con la policía y seguidores pagados del presidente —el saldo fue de dos muertos y centenares de heridos— las propias Fuerzas Armadas retiraban el respaldo al presidente que debía huir en helicóptero y refugiarse en la embajada brasilera ante la presión ciudadana que incluso copó el aeropuerto para impedir su huida. Luego que las marchas del 19 y 20 de abril superaran las cien mil personas (El Universo, 19.05.2005) y los medios publicitaran la violencia policial, se evidenció que la protesta había superado su crítica al gobierno y ahora se enfocaba ahora en el Parlamento; en conjunto de la democracia neoliberal. Cercado por una multitud enfervorizada y tomado por los manifestantes más radicales, los Parlamentarios refugiados en el Centro Internacional de Estudios Superiores de Periodismo en América Latina (Ciespal), sesionaron in extremis para declarar vacante el cargo presidencial.

La destitución de Gutiérrez no calmó a los movilizados que exigieron nuevas garantías al Parlamento para llevar adelante una Asamblea Constituyente y,

sobre todo, desistiera del Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE.UU y del establecimiento de una base militar estadounidense en Manta. Pese a la inicial disposición del gobierno interino de Alfredo Palacio, éste desdijo en cuanto la intensidad de la movilización disminuyó. La presión del orden tradicional así como de la embajada estadounidense seguían normando la democracia. Sin embargo, el temor a los efectos que la firma del TLC pudiera tener en las comunidades indígenas y su autonomía económica —conocidos era el impacto del TLC en el agro mexicano— la CONAIE se plegó masivamente a la acción forajida y al conjunto de la población (Cuneo, Gascó, 2013:210). Indígenas, estudiantes, mujeres campesinos, pequeños productores del agro, ecologistas y agrupaciones sociales “forajidas” se movilizaron durante quince días entre marzo y abril de 2006 mostrando el estado de alerta de la ciudadanía. Las demandas eran claras y contundentes y, de algún modo, volvían a marcar un límite ético en la crítica pública expresada por la protesta. Era, en definitiva, un auténtico “control democrático radical hacia las élites políticas” por parte de la ciudadanía, como señala Ramírez (2005a: 93). En consonancia con estas reivindicaciones la protesta resultó transversal y masiva. Pero además autónoma y perfilando objetivos específicos claros, pero dejando entrever —además— el anhelo por construir otra democracia. Ante esta fuerza una vez más la institucionalidad quedó superada debiendo acoger las demandas.

Esta nueva movilización, su enfoque y petitorio, supuso la base para una nuevo programa que canalizaría inexorablemente hacia un nuevo movimiento político; Alianza País. Liderado por Rafael Correa supuso un considerable cambio en el modo de articular la institucionalidad, pues rompió la hegemonía de *establishmen* partidista (Harnecker, 2014: 35). La llegada a la presidencia de Correa vino acompañada de importantes cambios que renovaron los aires de la política ecuatoriana. La articulación de una Asamblea Constituyente no cooptada por los partidos tradicionales como había ocurrido en 1998 (Ramírez, Guijarro, 2016), el reconocimiento a la diversidad cultural mediante la constitución de un Estado Plurinacional así como la prohibición de la privatización de bienes esenciales y estratégicos, entre otras, permitieron una masiva aprobación para la nueva Carta Constitucional en 2008. Asimismo, la disposición de no seguir los lineamientos del FMI, de cuestionar la legitimidad de la deuda externa — fuertemente disparada por el colapso de la banca el año 2000, deuda asumido por el Estado— y la distancia que tomó de las políticas neoliberales, posicionaron, en líneas generales, al gobierno de Correa como un proyecto político representativo del sentir de buena parte de la sociedad. Por eso, cuando el gobierno de Lenin Moreno (2017-2021) tomó distancia de la sociedad aplicando políticas de ajuste

fiscal que confirmaban el giro neoliberal del gobierno, la población no tardó en volver a las calles. Movimientos sociales, organizaciones indígenas, trabajadores y jóvenes, coparon nuevamente el espacio público para exigir la derogación de esas medidas, tal como veinte años antes lo habían hecho contra Bucaram y su alza del gas. Las protestas que desde 2019 se han producido, evidencian que pese a la diversidad que caracteriza a la población ecuatoriana, existe un consenso generalizado contra toda política que replique sin contrapesos la doctrina neoliberal de subordinar la democracia a los intereses del mercado.

#### NEOLIBERALISMO Y CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL. DIEZ AÑOS DE CRISIS POLÍTICA

La hegemonía neoliberal en el continente, penetró fuertemente en el sistema político ecuatoriano. Desde la década de 1990 y siguiendo las directrices del Consenso de Washington, la administración de Durán Ballén inició la desregulación del sistema financiero incentivando la especulación bursátil y bancaria; el boom especulativo trajo crecimiento, activo flujo de capital y relativo auge, el que rápidamente derivó, sin embargo, en una burbuja financiera. El proceso benefició a los grandes grupos económicos que presionaron al sistema político para legislar en su favor. Las conexiones entre grandes capitales, medios de comunicación y sistema político —partidos mediante— articularon un control que aprovechó el crecimiento económico de esos años para concentrar la riqueza. La desigualdad fue, como en todo el continente, burda: mientras estos consorcios conectados con las redes de poder político seguían enriqueciéndose, la pobreza alzaba al 69% de la población (Larrea, 2004).

Y pese al discurso de renovación que A. Bucaram prodigó, las políticas de ajuste fiscal dictadas por el FMI, se profundizaron durante su gobierno al igual que las privatizaciones de la industria estatal cubiertas en un manto oscuro de corrupción. De esta forma, la combinación de desprotección por las políticas neoliberales y descomposición del sistema partidario, posibilitaron el salto desde el malestar a la acción, encabezados por un moderno y potente movimiento indígena, articulado en la CONAIE (Le Bot, 2013: 152). Y si bien la protesta posibilitó la salida de Bucaram, el sistema de partidos logró reorganizarse para asumir sin que se produjesen grandes cambios en la estructura de poder. En efecto, pese a la destitución del “Loco”, la nueva Constitución de 1998 que prometía regeneración política y suponía el reconocimiento de la pluralidad étnica del Estado ecuatoriano, a su vez legitimó constitucionalmente la subordinación del orden social y estatal a las dinámicas del mercado. El nuevo

marco normativo estableció una profundización del neoliberalismo, privilegiando el orden económico e institucional a una ampliación de la participación democrática (Ramírez, Guijarro, 2016: 148). Esto pudo corroborarse con el arribo de J. Mahuad quien prometiéndolo honestidad y eficacia, reprodujo las directrices del FMI. Pero, además, azuzado por sus conexiones con el capital financiero local, amarró al Estado a asumir la responsabilidad de las deudas de las entidades financieras. Con esa ley, la banca se encargó de hacer estallar la burbuja que seguía creciendo año a año, pues ahora cualquier deuda sería asumida por el Estado. Este cuando entregó capital a las entidades para que devolvieran los ahorros de los ciudadanos, se declararon en banca rota quedándose con todo el capital del Estado el que hicieron desaparecer en paraísos fiscales. Fue lo que se conoció como “el atraco del siglo”. La crisis fue total dejando a la clase media sin sus ahorros. El feriado bancario duró cinco días. Corría marzo de 1999. El gobierno de Mahuad, siguiendo las sugerencias de la ortodoxia del FMI, aplicó una serie de políticas neoliberales que sólo encendieron más a la población. Reducción de salarios, aumento del IVA, alzas en los precios de los servicios básicos buscaron contener la crisis económica. Lo que logró, sin embargo, fue la reactivación de la crisis social.

Cuando, se observan las políticas implementadas durante los 90', las similitudes con Argentina son evidentes, sobre todo en aquellas destinadas a controlar la inflación a partir de un plan de convertibilidad. Y tal como en Argentina, el resultado fue desastroso; la electricidad aumentó en más de 300% mientras el gas a más de un 400% (Cuneo, Gascó, 2013: 197). Pero, además generaron una bomba de tiempo mediante la desbocada especulación financiera; 6 de cada 10 préstamos no podían ser devueltos.

La presión movimental liderada por la CONAIE en concordancia con otras organizaciones sociales, una vez más lograron frenaron las medidas. Mahuad decretó la dolarización de la economía, luego de una devaluación espectacular del sucre. La medida, por supuesto, supuso la pérdida del poder adquisitivo de las personas que disponían de sus ingresos y ahorros en moneda nacional. Sólo los grandes holdings sortearon la situación. La crisis fue total y obligó al desplazamiento de más de 1.5 millones de ecuatorianos. Con los ahorros perdidos, la sociedad en su conjunto perdió toda credibilidad en el sistema político. La corrupción era evidente —representantes de los grupos económicos ecuatorianos habían financiado la campaña de Mahuad— acreditando la sujeción del poder político al poder económico. El colapso de la política, subordinada a los intereses del gran capital, hizo ver a una importante mayoría de los sectores

medios ecuatorianos que la modernización prometida por el neoliberalismo era una quimera (Martucelli, 2021).

Las marchas de más de 10 mil indígenas hacia Quito en enero del 2000, provocaron una nueva ruptura: se sitió el Parlamento y la Corte Suprema. Se logró entrar al Congreso de manera pacífica, gracias a la colaboración de un sector de las FF.AA. liderados por el Coronel Lucio Gutiérrez. La fractura de los grupos de poder, permitió que la presión social surtiera nuevamente efecto: Mahuad renunciaba y se constituía un inédito “Triunvirato de Salvación Nacional”, que si bien no prosperó sentó las bases para el arribo del Coronel a la política años más tarde.

Con otros énfasis, pero al igual que Bucaram, Gutiérrez pretendió ser un giro de renovación de la política ecuatoriana. Si bien no pertenecía a la clase política tradicional que a través del sistema de partidos había vaciado a la democracia de sentido, el coronel se adaptó rápido a las lógicas del poder —aquella “gramática pública” que define las prácticas extendidas y sistematizadas que van de “la aplicación utilitaria de la ley, el corporativismo, el clientelismo y el patrimonialismo” (Ramírez, 2005b: 13-14)—, utilizando todo tipo y subterfugios para llevar adelante su agenda personal. En efecto, Gutiérrez llevó al límite la institucionalidad en su pugna con los partidos tradicionales presentando una serie de particularidades que buscaron diferenciarlo de la oligarquía partitocrática a través de su retórica popular. Sin embargo, derivó en un abierto autoritarismo interventor de los poderes del Estado, en la articulación clientelar de la política, cooptando y desmovilizando a seguidores y adversarios, constituyendo una red de poder alternativo —fuertemente conectado a su red militar— que se proyectaba como un nuevo polo político (Ramírez, 2005a). A fin de cuentas, el conflicto político expresaba una pugna inter-oligárquica entre un sector que había venido controlando los aparatos de Estado desde el retorno a la democracia en 1979 y otro que pugnaba por reemplazarlo, ambos conectados con poderosos intereses económicos. Hasta que, de nuevo la sociedad ecuatoriana estalló. Esta vez de manera autónoma.

#### SIGNIFICADOS DE LA MOVILIZACIÓN FORAJIDA

Ya señalamos que lo peculiar de la revuelta de 2005 estuvo no tanto en su disposición de sacar al presidente de turno —la destitución de un mandatario adquiriría a esas alturas tinte de repertorio conocido— sino en esa capacidad liberadora que alcanzó entre nuevos actores sociales. La ciudadanía, en efecto, se liberó de las estructuras partidistas para manifestarse y organizarse de manera

autónoma, autoconvocándose en pequeñas asambleas primero, y en masivas marchas luego, para exigir otro modo de la democracia. Si asumimos que los arribos de Bucaram y Gutiérrez fueron respuestas ciudadanas al hartazgo y descrédito de los partidos tradicionales subordinados al régimen neoliberal, debemos reconocer que la rebelión forajida expresó reivindicaciones y contenidos similares a las que Pachakutik articulaba diez años antes contra el populismo radical de Bucaram, cuestión que comprueba los límites que el éxito del movimiento indígena representó en la práctica para la democracia y la institucionalidad política (Massal, 2006: 121). Ahora bien, esta particularidad que representó la autonomía de la movilización ciudadana si bien manifestó de manera explícita su ánimo destituyente, también trazó referencias más o menos claras respecto al anhelo democrático que perseguía logrando canalizarse en un proyecto político más o menos específico un año más tarde.

La intensidad de la protesta, por otra parte, se relacionó a la enorme pluralidad de voces que la caracterizó. Convergieron clases medias urbanas, mujeres, jóvenes; defensores de la institucionalidad liberal-democrática, pero también aquellos que se organizaban y clamaban por una democracia asamblearia y autogestionada. Incluso, en menor medida, se sumaron personas de ideologías reaccionarias. La unión de izquierda y derecha se debió al giro autoritario experimentado por el gobierno de Lucio Gutiérrez y el abandono de la agenda transformadora del orden político que lo había llevado al poder. Esta diversidad, no obstante, no debe hacer perder de vista, considerando los discursos articulados en las asambleas así como en las reivindicaciones expresadas en pancartas, cánticos y rayados, el consenso amplio entre las y los ecuatorianos de la crisis estructural de la democracia, fruto de la permanente corrupción que propició el modelo neoliberal.

La repulsa al sistema partidario representó sin dudas el elemento aglutinante de la sociedad que venía hacia una década expresando su hartazgo con dicha institucionalidad. Los triunfos de Bucaram o el propio Gutiérrez no eran otra cosa que una alternativa –pobre, qué duda cabe— a la *partitocracia* instalada desde el retorno a la democracia. Toda la clase política, sin excepción, fue condenada y el antagonismo entre la ciudadanía y sus representantes definió el conflicto. De ahí que el “Fuera Lucio” se convirtiera rápidamente en “Fuera todos”. El sitio al Congreso el 20 de abril, también reseñó la transversalidad del descrédito institucional. Un Parlamento que contaba en esos momentos con menos del 2% de aprobación y legitimidad ciudadana (Harnecker, 2014:32), no tenía cómo representar a la multitud. Es más, ante la profundidad de la crisis, la propia idea de representación fue cuestionada –de ahí la proliferación masiva de

asambleas barriales— y los anhelos de una democracia directa, se instaló en el inconsciente colectivo de un importante sector de los movilizados (Ramírez, 2005b: 37).

Así, ante la sistemática corrupción de la política, la desobediencia civil resultó mucho más que una reacción circunstancial, inscribiéndose en una contestación generalizada al conjunto de la institucionalidad democrática que había definido los cauces normativos desde el retorno a la democracia en 1979, y que había modelado sus principios y los distintos ámbitos de la vida en sujeción creciente a las lógicas del mercado. Por eso entendemos que en ese ánimo destituyente existió un manifiesto ánimo constituyente: de refundación profunda, de regeneración democrática. Que logró ser canalizado meses más tarde por Alianza País y el liderazgo de R. Correa. De esta forma, esta crisis institucional devino de un proceso anterior, estrechamente vinculado al colapso económico experimentado por el país a partir de las medidas neoliberales que condujeron al crack financiero a fines de los noventa, ante el silencio cómplice e interesado de la clase política, pero, a su vez, supuso el inicio de un nuevo camino que condujo a una década de florecimiento político y económico del país.

#### EL ESTALLIDO CHILENO. EL DESPERTAR DE UN NUEVO PUEBLO (2019)

Las multitudinarias manifestaciones acontecidas desde el 18 de octubre (18-O) de 2019 en Chile, conforman uno de los escenarios de movilización social más potentes y genuinos del tiempo presente. Transcurridos 47 años del golpe de Estado que impuso a “sangre y fuego” la dictadura cívico-militar del General Pinochet e instauró el modelo neoliberal que rige hasta hoy, parecía que el destino de la sociedad chilena estaba condenado por las leyes de amarre establecidas por la “constitución tramposa” de la dictadura (Atria, 2015), y la escasa voluntad de la élite partidista por articular un nuevo orden institucional.

Y es que las élites gobernantes han construido una imagen extraordinariamente idealizada del Chile postdictatorial. Su estabilidad democrática —con elecciones periódicas y alternancia en el poder— y una activa y saneada economía, cegaron a una institucionalidad que menospreció los efectos que este modelo de sociedad ha tenido en la ciudadanía<sup>8</sup>. Por eso no sorprendieron los dichos del presidente

---

<sup>8</sup> *The Economist* publicó en 2018 su Informe sobre la democracia en que clasifica y caracteriza a las democracias del mundo. La chilena fue clasificada como “democracia defectuosa”. No obstante, “Debido a la disposición de la gente a salir a la calle, Chile mejoró su puntaje en la categoría de participación política y pasó de una 'democracia

Sebastián Piñera, días antes del estallido resaltando esa excepcionalidad: “en medio de esta América Latina convulsionada, Chile es un verdadero oasis con una democracia estable” (La Tercera, 09-10-2021). Esta autopercepción de una élite disociada de su pueblo fue la que se hizo añicos el 18-O. Fue esa enorme brecha entre la autocomplacencia de la elite y la realidad del país la que golpeó al mentón de la institucionalidad que “no vio venir” el extenso, profundo e histórico malestar de la sociedad, incubado durante las últimas tres décadas.

¡DESPERTÓ, DESPERTÓ, CHILE DESPERTÓ!

El acontecimiento directo que desencadenó la protesta de octubre de 2019 fue el alza en \$30 pesos (0.04 USD) de la tarifa en el boleto del Metro de Santiago, anunciada por el *Panel de Expertos en Transporte Público*. Desde entonces, los jóvenes, especialmente los secundarios, iniciaron un llamado a revelarse. Al grito de “¡Evadir, no pagar, otra forma de luchar!”, el Metro se convirtió en el centro de masivas y concurridas evasiones, potenciadas por ciudadanos que paulatinamente se sumaron al llamado de los estudiantes. Desde el 17 de octubre, mientras las estaciones eran resguardadas por Fuerzas Especiales de Carabineros, el conflicto ascendió en intensidad movilizadora y represiva, registrándose la destrucción de torniquetes e infraestructura del Metro; barricadas, saqueos e incendios en distintos puntos de la capital, y manifestaciones en Valparaíso y Concepción (ACNUDH, 2019: 6). Mientras eso acontecía, la estrategia del gobierno reprimió y criminalizó a los manifestantes tildándolos de “delincuentes” “anarquistas” o “antisociales”.

Sin embargo, todo cambió radicalmente cuando el viernes 18 la movilización por el alza del pasaje se convirtió en el epicentro de múltiples expresiones de rabia y descontento social. Mientras en la mañana las movilizaciones fueron protagonizadas en las proximidades del Metro; por la tarde la protesta se tomó las principales calles, poblaciones y barrios, que al son de ensordecedores “caceroleos”, barricadas, quema de estaciones del Metro y ataques contra Carabineros, demostraban su rabia y descontento por la precariedad que experimentan cotidianamente. Desde ese momento, el tiempo social se impuso al tiempo político del gobierno y el funcionamiento normal de la ciudad. Alrededor de las 20:00 hrs. el Metro —que transporta diariamente casi 2,8 millones de personas— había suspendido por primera vez en su historia todos sus servicios

---

defectuosa' a una 'democracia plena', obteniendo un puntaje total de 8,08" (Informe 2019) (*La Tercera*, 22.01.2020).

en la capital, lo cual, sumado a los cortes de calle y enfrentamientos urbanos entre los manifestantes y Carabineros, provocaron la desarticulación de todo el sistema de transporte capitalino. Ese día fue habitual observar a muchos trabajadores emprender kilométricas caminatas para regresar a sus hogares, teniendo como paisaje de fondo la explosión de la ciudad, es decir, el quiebre de la homogeneidad aparente de la vida bajo el neoliberal “oasis chileno”.

El gobierno, fiel a su lógica represiva, declaró el Estado de Emergencia en el gran Santiago y más tarde toque de queda en Santiago, Valparaíso y la Provincia de Concepción. Aquella decisión, no obstante, estimuló a los manifestantes que desafiaron la normativa con masivas concentraciones, saqueos y multitudinarios caceroleos desde sus hogares. Piñera, en tanto, declaraba (parafraseando al dictador A. Pinochet) que el país se “encontraba en guerra frente a un enemigo poderoso”, evidenciando la desconexión e incapacidad del gobierno –y de toda la clase política— de dimensionar e inteligir el masivo, explosivo y liberador grito de furia desencadenado el 18 y 19 de octubre. Desde ese día Chile entró a un cauce de ascendentes movilizaciones que tuvieron su punto más álgido el 25 de octubre con una concentración de casi 2 millones personas en la Plaza Italia, rebautizada por los manifestantes como Plaza de la Dignidad. “¡Despertó, despertó, Chile despertó! fue la consigna coreada en tono *barra brava*, por una heterogénea masa que desbordó las “grandes alamedas” de Santiago y gran parte del país.

Con todo, al correr los días y semanas del estallido, tanto en Santiago como en regiones, bastaba dar un paseo por la calles y principales avenidas de las ciudades para verificar los cientos de rayados y coloridos grafitis cargados de consignas que buscaban inteligir el explosivo y rabioso sentir del “pueblo”: “Violento es el sistema, violenta es tu riqueza, violenta es la pobreza”, “No se pide permiso para cambiar la historia”, “Son tantas cosas que no sé qué hueva poner”, “Renuncia Piñera”, “No son 30 pesos, son 30 años”, “No era depresión, era Neoliberalismo”, “ACAB (All Cops Are Bastard)”, “1973-2019”, “Evade como Piñera”, “Neoliberalism was born in Chili and will die here”, etc.

Por último, otro aspecto importante que entrecruza todo el proceso descrito fue la brutal represión y las graves violaciones a los Derechos Humanos propiciadas por agentes del Estado (Human Rights Watch, HRW, 2019; ACNUDH, 2019; INDH, 2019). Durante octubre y noviembre se contabilizaron 3.442 personas heridas en manifestaciones: 1.980 lesiones por arma de fuego; 51 heridas de bala; 1.462 lesiones por otras causas, como bombas lacrimógenas, fracturas y lesiones por golpes de Carabineros y las Fuerzas Armadas. Por otro lado, se registró un

total de 809 víctimas de violencia sexual principalmente dirigidos contra la comunidad LGTBI (INDH, 2019: 33 y 46). Asimismo, se constató un total de 133 casos de torturas y malos tratos (ACNUDH, 16). Las personas detenidas entre el 17 de octubre y el 30 de noviembre fue de 8.168 personas; 7.050 eran adultas (5.828 hombres y 1.222 mujeres). Por último, al 30 de noviembre de 2019, el Ministerio Público informó de 23 muertes ocurridas en el marco del estado de emergencia: 16 de ellas durante la comisión de delitos comunes; 2 bajo custodia de agentes del Estado y 5 fallecidas por acción de agentes del Estado (INDH, 2019: 27, 35 y 52).

Un aspecto que ha resultado particular de la represión, han sido los traumas oculares provocados por la táctica de Carabineros de disparar a la cara de los manifestantes. Los datos resultan escalofriantemente reveladores: el INDH contabilizó a 347 personas, en las que se cuentan: 16 casos de estallido de globo ocular; 5 casos de pérdida de visión por trauma ocular irreversible y lesiones causadas por trauma ocular (296 casos).

#### “NO SON 30 PESOS, SON 30 AÑOS”

Si bien el acontecimiento desencadenante del estallido tuvo relación con el alza del Metro, su desarrollo representa la punta del iceberg de un problema de mayor alcance y profundidad, relacionado con el carácter político y económico de la institucionalidad chilena amparada en la Constitución de 1980, y la forma en que “su” modelo fue administrado una vez que el régimen de Pinochet cesó.

Efectivamente, la imposición del neoliberalismo en Chile encarnó la síntesis de un proyecto político de carácter refundacional, cuyos principios rectores radicaron en el liberalismo económico, el autoritarismo y conservadurismo político como forma de gobierno (Gárate, 2012: 128). Esta estructura promovió, igualmente, la progresiva despolitización de la sociedad, particularmente aquella protagonista en los procesos de cambio social de la década de 1960 (Lechner, 1990; Valdivia, 2015). En lo esencial, el giro neoliberal no solo desmanteló el Estado benefactor fundado desde la década de 1920. Además, trajo aparejado una profunda reestructuración de la sociedad chilena, expresada en la formación de una cultura conservadora, individualista y consumista, imponiendo inéditas pautas de comportamiento social, encarnadas en una nueva morfología del trabajo y un acelerado ritmo de la vida cotidiana. En concreto, la transformación neoliberal propició una abrupta ruptura de las bases culturales y políticas forjadas a lo largo del siglo XX, en las cuales descansaron los proyectos políticos de justicia social de la izquierda y los sectores populares (Moulian, 1998; Ruiz,

2019:23; Donoso, 2018). Esta nueva concepción sobre la esfera económica, social y política se proyectó a la democracia, perfilando la transición, como un “proceso temporal, único, lineal y hegemónico, impuesto por las elites transicionales” (Ponce, Pérez y Acevedo, 2018: 9-11). Esto implicó que la política fuera un patrimonio exclusivo de las elites políticas y empresariales, (Artaza, 2019; Garcés, 2020).

Teniendo en consideración las coordenadas donde se sitúa la vida de los últimos 30 años en Chile, el consenso en el análisis del 18-O apunta en dos direcciones. La primera, guarda relación con la profunda desigualdad y concentración de la riqueza en Chile, que lo posicionan en los primeros lugares de los países Latinoamericanos y la OCDE (ACNUDH, 2019:4). En efecto, si bien durante la postdictadura, Chile se caracterizó por un sostenido crecimiento económico (5% anual durante los últimos 20 años), un considerable aumento del PIB per cápita desde los USD 4.787 a USD 22.197 en el 2015 (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, 2017); y la disminución progresiva de la pobreza que en el periodo de 1990-2006 descendió de un 38,6% al 13,7 % (Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional, CASEN, 2006: 3); y desde el 2006, disminuyó de un 29,1 %, al 8,6% en el 2017; mientras que la extrema pobreza en el mismo periodo disminuyó de 12,6% a 3,5% (Informe de Desarrollo Social, 2019: 14). Es menester subrayar, no obstante, que aquellas cifras convivieron con una negligente asimetría en su distribución: mientras el 50% de los hogares concentró para el 2017 el 2,1% de la riqueza del país, el 10% más rico concentró el 66,5%, mientras el 1% más rico un 26,5% (Comisión Económica Para América Latina y el Caribe, CEPAL, 2018:62). Por su parte, el ingreso medio mensual durante el 2018 fue de \$573.964 pesos, donde el 50% de la población recibió ingresos menores o iguales a \$400.000 pesos (alrededor de \$517,58 USD). De ese total, el 50,2% corresponde a mujeres, cuyo ingreso medio mensual alcanzó un promedio de \$343.244 (489,27 USD) (Instituto Nacional de Estadísticas, INE, 2018). Mientras que el salario mínimo, ajustado actualmente a \$240.000 pesos líquido (342,10 USD), supera en \$64.000 (91,23 USD) la línea de la pobreza (Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, 2019:6).

En otras palabras, el acceso a los beneficios básicos de la modernidad capitalista que tanto pregónó el modelo se ha sustentado en base a deudas y una distribución desigual, provocando un efecto de dependencia y subordinación sino esclavizante, al menos de profundo estrés, inseguridad e incertidumbre entre las familias chilenas (PNUDH, 1998, 2010:62). Estos datos sitúan la noción de desigualdad y desesperanza con la vida que toca vivir, en otros códigos y referencias. Como señala S. Edwards (2019), parece conveniente distinguir entre

desigualdad “vertical” (ingresos) y desigualdad “horizontal” (social). Mientras que la primera se puede medir con cierto grado de precisión, la segunda acepción es un concepto algo vago que a menudo depende de cómo las personas perciben sus vidas e interacciones sociales con otros en sus comunidades y lugares de trabajo. En esa dirección la OCDE ha establecido nuevos parámetros para identificar de mejor manera cómo perciben su situación las personas en la sociedad, a través del “Better Life Index”. En el fondo, la cuestión radica en que tan pronto como uno pasa a los macros índices (PIB, GINI), a medidas más amplias de desigualdad horizontal, la visión de Chile como el paraíso de América Latina se vuelve claramente cuestionable.

En segundo lugar, y visto desde una óptica mundial, se argumenta que nos encontramos frente a lo que Manuel Castells (2017) ha denominado como una crisis global de la democracia liberal, signada por el quiebre subjetivo de la ciudadanía respecto a sus representantes, y que se expresa por medio de una pluralidad de organizaciones que buscan tensionar al *establishmen*. En ese sentido, el análisis del estallido chileno apunta, por un lado, a un movimiento que nace desde la sociedad civil, emerge contra el Estado, la clase política y la institucionalidad neoliberal vigente. Por otro, que se sitúa en medio de una profunda crisis de representación y legitimidad de la élite política, donde el malestar guarda relación con el tipo de democracia pactada en “las alturas”, a espaldas de la sociedad (Garcés, 2020). Tales condiciones, en esta última década, se manifiestan explícitamente en un alto desencanto con la política (75%) y un desplome de la confianza en las instituciones: Fuerzas Armadas (21 puntos porcentuales (PP)); Carabineros (17 PP); Poder Judicial (18 PP); Partidos Políticos (10 PP), siendo estas las cifras más defectuosas de los últimos 30 años (Market Opinion Research International, MORI, 2019: 4 y 24). Asimismo, la confianza en la Iglesia se desmoronó a un mínimo histórico de 27% en 2018, (36% en 2017) (Latinobarómetro, 2018:48). En esa dirección, destacan los diferentes episodios de corrupción, malversación de fondos públicos y financiamiento ilícito a partidos políticos expresados en casos como SOQUIMICH, PENTA o CORPESCA. Asimismo, con el millonario fraude de Carabineros (Pacogate) y Fuerzas Armadas (Milicogate) (Grez, 2019: 14).

Pero el listado de agravios y dolencias sociales no quedaría completo sino miramos retrospectivamente el proceso de reorganización del tejido social y político durante los años de la postdictadura, es decir, entre 1990-2019. En ese sentido, los estudiantes secundarios en el 2006, en el marco de la “Revolución Pingüina” comenzaron la crítica al modelo mercantil de la educación en Chile. A ellos, se sumaron durante el 2007 las movilizaciones de los trabajadores

subcontratistas de CODELCO y forestales. También se activó la movilización de los trabajadores de las empresas salmoneras y los pescadores artesanales, y trabajadores públicos pronunciándose contra la mercantilización de los derechos sociales. Igualmente, la extendida lucha de los pueblos indígenas por su reconocimiento dentro del Estado y la recuperación de sus territorios ancestrales como lo ha expresado el movimiento Mapuche (Seminario de la Violencia, 2019).

Desde el 2010 en adelante, presenciamos focos de movilización que irrumpen notoriamente con el auge del movimiento estudiantil (2011- 2013) el cual instaló como demanda central la reivindicación por el derecho a la educación gratuita y de calidad. Igualmente, se activaron movimientos regionales que hartados del abandono del Estado, el excesivo centralismo y la falta de instrumentos para autonomizar la toma de decisiones locales, irrumpieron con fuertes movilizaciones en Calama (2010-2013), Magallanes (2011), Aysén (2012) Arica (2013) y Tocopilla (2014). Asimismo, la activación de los conflictos territoriales-ambientales que han puesto en tensión la política extractivista y la devastación de los ecosistemas naturales, como fue en Pascua Lama durante el 2005-2006, 2013, Mehuin (2006), Caimanes (2010), Castilla (2010), Hidroaysén (2011), Freirina (2012) y Chiloé (2016) (Penaglia, Valenzuela, Leguá, 2018: 144).

Desde el 2015 identificamos la irrupción de un diverso Movimiento Feminista, el cual incorporó como elemento sustancial al debate la instauración de la cultura patriarcal en diferentes ámbitos de la vida social, que tuvo su expresión más fuerte con el “Mayo Feminista” del 2020 (convocando en esta última jornada “histórica” más de 2 millones de mujeres). Este movimiento, durante las manifestaciones de octubre, se posicionó visiblemente (a nivel nacional e internacional) denunciando a través del colectivo *Las Tesis* y su performance “Un violador en tu camino”, la violencia política-sexual cometida por agentes del Estado y hombres. Por su parte, también tuvo un mayor protagonismo la comunidad LGTBI. En paralelo, presenciamos la lucha del movimiento por un nuevo sistema de provisión social (NO + AFP) y la irrupción del movimiento de profesores durante el primer semestre del 2019.

Por último, habría que destacar la titánica lucha del Movimiento de Derechos Humanos en Chile, el cual, desde la dictadura hasta nuestros días, ha insistido persistentemente sobre los procesos de justicia, verdad y no a la impunidad por los crímenes perpetrados durante el régimen cívico-militar (Orellana y Hutchison, 1991).

MEMORIA HISTÓRICA DE LA PROTESTA Y RECONFIGURACIÓN SOCIAL

A pesar de este crudo saldo propiciado por las fuerzas de orden y seguridad del Estado, los toques de queda, y el asedio policial -que retrotrajo la memoria más cruenta del régimen de Pinochet, que se pensaba superada- durante los días de manifestaciones se gestó un contrapunto de solidaridad y organización social expresado en las Ollas Comunes, puntos de primeros auxilios, decenas de cabildos barriales erigidos desde los territorios, comités de base de DD.HH., y múltiples acciones sociales que recrearon viejas prácticas colectivas. El surgimiento de estos espacios reactivó la experiencia y memoria de la lucha contra la dictadura, en particular, aquella referida a las épicas jornadas de protestas nacionales de 1983-1986 (De la Maza y Garcés, 1983; Bravo, 2017; Radic, 2019). Igualmente, ocurrió con la memoria vinculada a la Unidad Popular, reviviendo el legado cultural de exponentes como Víctor Jara e Inti-Illimani. Mientras que figuras como Violeta Parra, Gabriela Mistral o Salvador Allende, fueron revitalizadas incorporándolas en los murales que colorearon y dieron vida a la opacidad de las murallas durante el “octubre chileno”.

En suma, considerando estos antecedentes, sostenemos que el estallido social del 18-O debe comprenderse como el resultado de la acumulación de un profundo y diverso malestar social urdido a lo largo de estos 30 años. En primera instancia, tras la instauración de modelo neoliberal (1980) que trajo consigo la pérdida de garantías estatales de protección social. Luego, con la experiencia de gobernabilidad democrática de la transición, perfilada como un proceso “único y lineal” que devaluó la participación de la ciudadanía, se anquilosó a la gradualidad del cambio social por medio de la “política de los consensos”, como condición de posibilidad para la sobrevivencia de la política y estabilidad democrática (Mella y Berrios, 2013: 436, 437). Justamente, desde nuestra perspectiva, es ese modelo y forma de hacer política en Chile la que se encuentra cuestionada profundamente en la actualidad. Su inflexibilidad, frente a los llamados ciudadanos por mejores accesos a derechos sociales -una lucha por la dignidad-, expresado en diferentes ciclos de movilización bajo la experiencia neoliberal entre el 2006 y 2019 se presenta como un fenómeno social, masivo, multifacético, pluri-clasista, heterogéneo y popular, lo cual supone un gran desafío al momento de caracterizar el tipo de movimiento que irrumpe en el 18°.

A pesar de esas dificultades, es posible destacar algunos rasgos distintivos de este movimiento respecto a otras experiencias, por ejemplo: carece de un convocante central (líder) y una orgánica que le permita articularse, aunque al correr de los días Unidad Social, se perfiló como un espacio de “conducción”; la pluralidad de

actores y actrices sociales y políticos que no presenta un programa unificado que le permita tener una mayor proyección política en el tiempo y aunar sus atomizadas demandas; y, a diferencia de las movilizaciones constatadas desde el 2006 a la fecha, nos encontramos con un movimiento que no solo instala una demanda por mayores accesos a derechos sociales, sino que también, sitúa un profundo cuestionamiento a la élite política de la transición a la democracia.

En resumen, estimamos que el “despertar de un nuevo pueblo” en Chile (Ruiz, 2020), es la suma de los derroteros cursados por una amplia mayoría de la sociedad chilena desde el golpe de estado de 1973 hasta nuestros días. Forzado inicialmente a desenvolverse bajo una doctrina económica y política enajenante y alienadora —que, por lo demás, influyó en el modo que se materializó la reconfiguración política de los actores sociales—, siguió su cauce hacia una transición democrática que logró contener parte de sus dolencias, pero con significativas concesiones con la élite política que inocularon asimetrías escandalosas, gestaron la corrupción de sus instituciones y reforzaron un desacoplamiento entre la esfera social y política. El malestar se expresó progresivamente durante tres décadas en frustraciones a nivel individual y colectivo, explosivas manifestaciones sociales (medioambientales, género, laborales, estudiantiles, etc.) y multisectoriales (local, regional y nacional), que a estas alturas son un verdadero cuadro resumen de la multifacética y heterogénea lista de actores y actrices sociales que pusieron fin, al menos en el plano subjetivo e intersubjetivo al “oasis” chileno. Justamente es esta convergencia de generaciones las que representan los anhelos de un nuevo pueblo que se reencuentra con su memoria política, portadora de una reconfiguración política de un potencial contenido emancipatorio, democrático y antineoliberal.

#### CONSIDERACIONES FINALES

Las protestas, revueltas y movimientos sociales que han marcado el tiempo presente latinoamericano, han presentado su especificidad y particularidad acorde a los contextos nacionales contingentes que las han posibilitado. También, una enorme pluralidad en sus contornos; ninguno de los movimientos y ciclos aquí analizados puede reducirse a un grupo de la sociedad o sector político; menos que presenten un sólo significado. Estos son múltiples e incluso antagónicos en algunos casos. Sin embargo, han presentado, igualmente, una serie de continuidades y conexiones que invita a pensarlas como unidad. Como reflejo y expresión de un doble proceso que se ha venido constituyendo, en general, en casi todo el continente, directamente relacionado con los efectos que

el sistema neoliberal ha tenido en el régimen político –democrático— y sus sociedades. Por una parte, resulta evidente que el malestar de la sociedad presenta como factor común y aglutinante, el hartazgo con los efectos que el neoliberalismo ha supuesto para la vida de las personas, expresados en el rechazo a la creciente y manifiesta desigualdad que el auge macroeconómico ha supuesto entre sus ciudadanos. Por otra, en la progresiva pérdida de legitimidad del orden democrático, corroído por su subordinación al mercado, desconectado de los intereses y preocupaciones de sus ciudadanos. Este ánimo destituyente ha supuesto, en definitiva, una crítica profunda al modelo de sociedad y al régimen político que ha erigido el neoliberalismo en la región. Porque, el cuestionamiento a la representación que articulan las sociedades aquí analizadas durante el periodo, supone también un cuestionamiento a las instituciones democráticas (neo)liberales. No es algo nuevo. En los tres casos analizados, se observa un cuestionamiento a la corrupción y pérdida de sentido de esta institucionalidad. Su distancia de la gente común, la captura por quienes hacen del ejercicio de la política un vulgar asalto del Estado y un reparto de sus beneficios, acompaña a esa dimensión crítica acerca de los efectos corrosivos del modelo económico imperante. Igualmente evidente, resulta la deriva del Estado como estructura dócil a los intereses particulares de los grandes capitales; esto también ha ocurrido con toda la orgánica de las sociedades actuales: sindicatos, parlamentos, partidos, y medios de comunicación han sido fuertemente interpelados por la sociedad como espacios sometidos a una estructura de dominación antes que desempeñar su papel como intermediarios de la sociedad.

Pero, en segundo orden, parece relevante resaltar que, con matices e intensidades pesquisables sólo en un análisis espacio-temporal más amplio, inscrito en este tiempo de la democracia neoliberal, las sociedades latinoamericanas movilizadas han ido articulando gradualmente una reconfiguración de lo político, sustentada en otros modos de pensar e imaginar la democracia. Es cierto que la heterogeneidad impide ordenar al amplio espectro de la ciudadanía movilizada en una sola dimensión. Sin embargo, cada vez adquieren mayor importancia la participación ciudadana en la toma de decisiones, ya no sólo limitada a la lógica electoral o la construcción de un orden socioeconómico que garantice la dignidad de las personas sin importar su cultura, ideología, clase o procedencia. Cuestiones que supone asistir a una demanda de fondo por un cambio sustancial en las relaciones de poder al interior de las propias sociedades latinoamericanas. La posibilidad que esta demanda y su articulación ciudadana derive en procesos de ampliación radical de la democracia proyectados en una afín institucionalidad política, definirá el grado y

profundidad del cambio que de sentido y significado a las protestas y movilizaciones de la ciudadanía en la región. No obstante, nos parece vislumbrar en las protestas y su incipiente rearticulación política, otros códigos culturales que invitan a considerar que el tránsito cultural de las sociedades latinoamericanas empuja hacia una dimensión posneoliberal de la política, la democracia y la vida en sociedad y que, sin dudas, se posicionan como un antagonismo manifiesto y urgente a la institucionalidad vigente.

#### BIBLIOGRAFÍA

- ANDRADE, M. HERRERA, S.G, OSPINA, P. (2008): *Mapa de los movimientos sociales en el Ecuador*. Quito, Instituto de Estudios Ecuatorianos.
- ARÓSTEGUI, J. (2004): *La historia vivida*, Madrid, Alianza.
- ATRIA, F. (2015): *La Constitución tramposa*, Santiago, LOM.
- BADIOU, A. (2012): *El despertar de la historia*, Madrid, Clave Intelectual.
- BRAVO, V. (2017): *Piedras, barricadas y cacerolas. Las jornadas nacionales de protestas, Chile 1983-1986*, Santiago de Chile, Ediciones Alberto Hurtado.
- BRINGEL, B. PLEYERS, G. (eds.) (2017): *Los movimientos sociales en el nuevo orden mundial*. Buenos Aires, CLACSO, FAPERJ.
- BURBANO, F. (2005). “La caída de Gutiérrez y la rebelión de abril”. *Íconos. Revista de Ciencias Sociales*, núm. 23, septiembre. Quito, FLACSO.
- BUSTAMANTE, T. (2005), “El fervor democrático quiteño: ¿un mito, un sueño o algo sustancial?”. *Íconos. Revista de Ciencias Sociales*, núm. 23, septiembre. Quito, FLACSO, pp. 55-64.
- CALDERON F., CASTELLS, M. (2019): *La nueva América Latina*, México D.F., FCE.
- CASTELLS, M. (2019): “Explosiones sociales. Una visión global”. Conferencia en el Centro de Estudios Públicos, Santiago. 6-11. En internet: <https://www.youtube.com/watch?v=h97emCUyMf0> Revisado 14.09.2020.
- (2017): *Ruptura. La crisis de la democracia liberal*, Madrid, Alianza Editorial.
- (2012): *Redes de indignación y esperanza. Los movimientos sociales en la era de internet*. Madrid, Alianza Editorial.
- CONRAD, S. (2017): *Historia global. Una nueva visión para el mundo actual*. Barcelona, Ed. Crítica.

- CÚNEO, M. GASCÓ, E. (2013): *Crónicas del Estallido. Viaje a los movimientos sociales que cambiaron América Latina*, Barcelona, Icaria Antrazyt.
- CHÁVEZ, D. RODRÍGUEZ GARAVITO, C. BARRETT, P (2008): *La nueva izquierda en América Latina*, Madrid, Los Libros de la Catarata
- CHOMSKY, N. BARSAMIAN, D. (2013): *Las sublevaciones democráticas globales*, Barcelona, Pasado&Presente.
- DABENÈ, O. (1999): *América Latina en el siglo XX*, Madrid, Síntesis.
- DE LA MAZA, G. y GÁRCES, M. (1985): *La explosión de las mayorías: protesta nacional 1983-1986*, Santiago, Gráficas Andes, Educación y Comunicación (ECO).
- DINTERSTEIN A., CONTARTESE D., DELEDICQUE M. (2010): *La ruta de los piqueteros*, Buenos Aires, Capital intelectual.
- DONOSO, K. (2019): *Cultura y dictadura. Censuras, proyectos e institucionalidad cultural en Chile, 1973-1989*, Santiago de Chile, Ediciones Universidad Alberto Hurtado.
- FERNÁNDEZ, K., BOHOSLAVSKY, J., SMART, S., (2019): *Complicidad económica con la dictadura chilena. Un país desigual a la fuerza*, Santiago de Chile, LOM Ediciones.
- FERNÁNDEZ, P (2020): *Sobre la marcha. Notas acerca del estallido social en Chile*, Santiago, Debate.
- GÁRATE, M. (2012): *La revolución capitalista en Chile* Santiago de Chile, Ediciones Universidad Alberto Hurtado.
- GARCÉS, M. (2020): *Estallido social y una nueva constitución para Chile*, Santiago de Chile, Lom Ediciones.
- (2012): *El despertar de la sociedad. Los movimientos sociales en América Latina y Chile*, Santiago, LOM ediciones.
- GAUDICHAUD, F. (ed.) (2015): *América Latina. Emancipaciones en construcción*, Santiago de Chile, Editorial América en Movimiento Tiempo Robado, Editoras.
- GRANOVSKY, M (2001): "Fernando de la Rúa se fue como quien desangra". Buenos Aires, *Página 12*, pp. 21-12.
- HARVEY, D (2007). *Breve historia del neoliberalismo*. Madrid, Akal.
- HOBSBAWM, E (2018): *¡Viva la revolución!*, Barcelona, Crítica.
- LECHNER, N. (1990): *Los patios interiores de la democracia*, México, F.C.E.

- LE BOT, Y. (2013): *La gran revuelta indígena.*, México D.F., Ed. Océano.
- (1997): *Subcomandante Marcos. El sueño Zapatista.* Plaza y Janés, México D. F.
- ORELLANA, O. y HUTCHISON, E. (1991): *El movimiento de Derechos Humanos en Chile, 1973-1990*, Santiago, Centro de Estudios Políticos Latinoamericanos Simón Bolívar CEPLA.
- MASSAL, J (2006): “El papel de los movimientos sociales en la consolidación democrática: reflexiones alrededor del caso ecuatoriano en perspectiva comparada”. *Colombia Internacional* 63, pp. 108-127.
- (2014): *RevueLTas, insurrecciones y protestas. Un panorama de las dinámicas de movilización en el siglo XXI.* Bogotá, Ed. Debate.
- MARTÍNEZ LILLO, P. RUBIO, P. (2017): *América Latina actual. Del populismo al giro de izquierdas.* Madrid, Los Libros de la Catarata.
- MAZZEO M. (2013): *Piqueteros. Breve historia de un movimiento popular argentino,* Buenos Aires, Quadrata.
- McADAM, D, TARROW S, TILLY, CH (2003). *Dinamic of contention.* New York, University press, Cambridge.
- MELLA, M. y BERRIOS, C. (2013): *Gobernabilidad, democratización y conflictividad social en Chile: escenarios posibles para un nuevo equilibrio,* Polis, revista latinoamericana, volumen 12, N° 35, 2013, pp. 429-458.
- MOULIAN, T. (1998): *El consumo me consume,* Santiago de Chile, LOM Ediciones.
- PENAGLIA, F., VALENZUELA E. y LEGUÁ, J. (2018): *Los movimientos regionalistas en Chile y la descentralización cooptada del bloque en el poder.* Revista de Estudios Políticos, 179, 131-169.
- PEÑA, C. (2019). *Pensar el malestar,* Santiago, Taurus.
- PÉREZ G. PEREYRA, S. (2013): “La protesta social entre las crisis de la democracia argentina”. *Revista SAAP*, Vol. 7, No 2, noviembre 2013, pp. 463-471.
- PEREYRA S. (2013): “Procesos de movilización y movimientos sociales desde la transición a la democracia”, Buenos Aires, *Revista Observatorio Latinoamericano,* Universidad de Buenos Aires.
- PONCE, J., PÉREZ, A. y ACEVEDO, N. (2018): *Transiciones. Perspectivas historiográficas sobre la postdictadura chilena 1988-2018,* Valparaíso-Chile, editorial América en Movimiento.

- RADIC, VEGA, J. (2019): *Microhistoria de la vida en dictadura en Santiago de Chile durante las Protestas Nacionales (1983-1986). Representaciones, prácticas y significados en Santa Adriana y La Pincoya*. Tesis doctoral en Historia Contemporánea, Universidad Autónoma de Madrid.
- (2013): “Movimientos sociales en el tiempo presente ¿Hacia un cambio de paradigmas?” VVAA. Jornadas Doctorales. Universidad Autónoma de Madrid y Universidad Complutense de Madrid. Ediciones UAM, Colección Actas CD, Madrid, pp. 373-390.
- RAMIREZ, F (2005a): “Insurrección, legitimidad y política radical”. Íconos, revista de Ciencias Sociales, núm. 23. Septiembre. Quito, FLACSO, pp. 83-92.
- RAMÍREZ, F (2005b): *La insurrección de abril no fue solo una fiesta*. Taller El Colectivo: Quito.
- RAMÍREZ R. GUIJARRO J (2016): “De la ira a la esperanza: la disputa del futuro en Ecuador”. En SADER, E. GARCÍA LINERA, A. FORSTER, R. (2016): *Las vías abiertas de América Latina*, Buenos Aires, Ed. Octubre, pp. 131-204.
- RUIZ, C. (2020): *Octubre chileno. La irrupción de un nuevo pueblo*. Santiago: Taurus.
- (2015): *De nuevo la sociedad*, Santiago: LOM ediciones.
- SALVADOR LARA, J. (2009): *Breve historia contemporánea del Ecuador*, Bogotá, Fondo de Cultura Económica.
- SADER, E. JINKINGS I. (coord) (2009): *Enciclopedia Contemporánea de América Latina y El Caribe*, Madrid: Akal.
- SADER, E. GARCÍA LINERA, A. FORSTER, R. (2016): *Las vías abiertas de América Latina*, Buenos Aires, Ed. Octubre.
- STIGLITZ, J. (2018): *El malestar de la globalización*, Madrid, Taurus.
- SVAMPA, M. (2012): *Cambio de época. Movimientos sociales y poder político*, Buenos Aires, Siglo XXI y CLACSO.
- SVAMPA, M. PEREYRA, S. (2003): *Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras*. Buenos Aires: Biblos.
- TARROW, S (2009). *El poder en movimiento*, Madrid, Alianza editorial.
- TRAVERSO, E. (2012): *La historia como campo de batalla. Interpretar las violencias del siglo XX*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.
- UNDA, M. (2005): “Quito en abril: los forajidos derrotan al coronel”, *OSAL* n°16. CLACSO, pp. 129-135.

- VALDIVIA, V. (2015): *La democracia dictatorial pinochetista: regionalización y municipios*, Avances del Cesor, Año XII, V. XII, N° 12, pp. 171-187.
- ZIBECHI, R. (2013): “debajo y detrás de las grandes movilizaciones”. *Revista del Observatorio Social de América Latina (OSAL)*, Buenos Aires, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Año XIV, N° 34, noviembre.

#### FUENTES PRIMARIAS

Diario Página 12. 19-24 de diciembre 2001. Buenos Aires.

Diario La Hora, 14-23 de abril 2005. Quito.

Diario La Tercera, 09-10-2019. Chile.

*Encuesta suplementaria de ingresos (ESI)*, 2018, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Frente Popular Darío Santillán. *Selección de Documentos 2000-2013*. 2013, Buenos Aires.

*Informe sobre la misión a Chile, 2019*, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (ACNUDH)

*Informe Anual sobre la situación de los Derechos Humanos en Chile en el contexto de la crisis social*, 2019, Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH)

*Barómetro de la Política*, 2019, Market Opinion Research International (MORI).

*Informe*, 2018, Latinobarómetro.

*Encuesta de caracterización socioeconómica nacional*, 2006, CASEN.

*Declaración pública*, 2019, Seminario Internacional sobre Historia de la Violencia en América Latina.

*Chile Despertó. Lecturas desde la Historia del estallido social de octubre*, 2019, Santiago, Universidad de Chile.

*Informe de desarrollo humano en Chile*, 1998, Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

*Informe de desarrollo humano en Chile*, 2010, Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

*Panorama social de América Latina, 2018*, CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe).

*The Economist Intelligence Unit*, (2018). Democracy Index, Online.

<https://www.economist.com/graphic-detail/2019/01/08/the-retreat-of-global-democracy-stopped-in-2018> Consultado, 27.08.2021.

*Transparency International*. Informe Anual, 2004.

[https://issuu.com/transparenciainternational/docs/informe\\_anual\\_2004\\_esp](https://issuu.com/transparenciainternational/docs/informe_anual_2004_esp) Consultado, 04.11.2021

Recibido: 10/10/21

Aceptado: 12/11/21

**Juan Radic Vega** es Doctor en Historia Contemporánea, Universidad Autónoma de Madrid. Académico e investigador, profesor titular de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, profesor adjunto al Instituto de Historia del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile e investigador asociado a la Cátedra de Estudios Africanos del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Líneas de investigación: movimientos sociales en América Latina, Microhistoria e historia local de Chile, Historia del Tiempo Presente e Historia de África Contemporánea. [jiradic@uc.cl](mailto:jiradic@uc.cl)

**Felipe Delgado Torres** es Licenciado en Historia de la Universidad de Tarapacá, Magíster en Historia Universidad de Santiago de Chile. Líneas de investigación: Movimientos sociales en Chile, movimiento de Derechos Humanos en el Cono Sur de América Latina. Se ha desempeñado como personal técnico en el proyecto de investigación FONDECYT N° 1150090. Actualmente colabora como profesional del apoyo del proyecto FONDECYT N° 11200259, y de la investigación titulada “Registro, identificación y difusión del patrimonio fotográfico ariqueño de los años ochenta a través de la colección del periodista Héctor Mérida Céspedes”, del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes de Chile. [felipe.delgadotorres@gmail.com](mailto:felipe.delgadotorres@gmail.com)